INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

2025

Oficina de
Atención y
Protección a la
Víctima del
Delito





MP
MINISTERIO PÚBLICO
PODER JUDICIAL DE COSTA RICA

Oficina de Atención y Protección a la Víctima
Ministerio Público • Poder Judicial

200 AÑOS
PODER JUDICIAL
Fortaleza de la Democracia al servicio de Costa Rica

CONTENIDO

Capítulo I — 08
- La identidad institucional y el marco estratégico (misión, visión y valores).
- Vinculación del accionar de la O.A.P.V.D. con el Plan Estratégico del Poder Judicial.

Capítulo II — 17
- Programa de Protección. Dinámica, alcances y efectividad de las medidas de protección extraprocesales.
- Dinámica del Programa de Atención de la O.A.P.V.D.

Capítulo III — 26
- La O.A.P.V.D., en cifras. La gestión de casos.
- Caracterización de los tipos penales de mayor incidencia, en los casos atendidos por la O.A.P.V.D. en ambos programas.
- La atención y protección a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad

Capítulo IV — 51
- Resultados área de psicología
- Resultados Trabajo Social
- Resultados desde el Área legal
- Resultados disciplina de criminología
- Acompañamiento profesional a las personas usuarias y la modalidad de atención personalizada denominada “visitas domiciliarias”.
- Informes confeccionados por los Equipos técnicos sobre la valoración de situación de riesgo de las personas usuarias en el Programa de Protección para la adopción de medidas procesales y otras diligencias en el proceso penal.

CONTENIDO

68 **Capítulo V**
- Formulación y ejecución presupuestaria

79 **Capítulo VI**
- La sensibilización en la atención y abordaje a víctimas del delito.
- Formación de personal profesional de nuevo ingreso.
- Los procesos formativos y de proyección en la O.A.P.V.D.

85 **Capítulo VII**
- Iniciativas bajo la modalidad de la metodología de proyectos.
- Protocolos para la implementación de nuevos procesos o fortalecimiento de otros.
- Otras acciones relevantes.

98 **Capítulo VIII**
- Retos y Desafíos

101 **Capítulo IX**
- Proyecciones Futuras

Presentación

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, en adelante O.A.P.V.D., dependencia adscrita al Ministerio Público, conforme al mandato de velar por la protección de la vida e integridad física y del abordaje integral para minimizar los efectos adversos de los hechos delictivos de quienes intervienen en los procesos penales, presenta una vez más el informe anual de rendición de cuentas y transparencia de su gestión dentro del marco de la legalidad.

La O.A.P.V.D., consiente con su deber constitucional de informar a la ciudadanía, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, cómo se utilizan los recursos públicos que le han sido asignados y qué decisiones se toman en el ejercicio de su misión institucional. Por este motivo, ha asumido un compromiso de comunicar de manera clara, justificar sus acciones y asumir los retos derivados de su gestión para garantizar un servicio público de calidad.

Uno de los pilares fundamentales de los servicios de atención y protección a las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, requieren de un enfoque integral, centrado en la persona, que acompañe a la víctima desde el primer contacto con las autoridades judiciales y hasta la conclusión del proceso penal.

En este contexto, se trabaja arduamente para que los programas garanticen el acompañamiento integral durante el proceso judicial. Muchas personas usuarias enfrentan revictimización, desconocimiento de sus derechos o temor a represalias, por lo que, se requiere de una asesoría legal clara, información accesible sobre el estado del proceso, un apoyo psicosocial continuo para promover una mayor adherencia a los servicios, todo esto, con la firme convicción que las víctimas y testigos de este país no enfrenten el sistema de justicia en soledad.

Seguimos trabajando en la adopción de buenas prácticas para un mejor abordaje de los casos, desarrollando campañas educativas, formando profesionales, ejerciendo una participación comunitaria, como herramienta clave para fortalecer la confianza en el sistema y fomentar una cultura de respeto a los derechos de quienes intervienen en los procesos penales.

En suma, la O.A.P.V.D. se encuentra en un momento crucial de su historia institucional. La creciente inseguridad ciudadana y el incremento en la incidencia criminal, requiere de la implementación de nuevas prácticas que faculten una protección efectiva de los derechos de los sujetos intervinientes en los procesos penales para resguardar su seguridad, de modo que se garantice su acceso a la justicia y se evite la impunidad.

El presente informe se organiza en nueve capítulos y presenta los principales resultados de la gestión institucional. En él se rinde cuenta sobre la labor administrativa, operativa y estratégica de la O.A.P.V.D. como instancia adscrita al Ministerio Público, incluyendo cifras de atención, características de la población usuaria, ejecución presupuestaria, gestión del talento humano, procesos de mejora e innovación; así como los principales retos y proyecciones.

Finalmente, este documento no solo constituye una rendición de labores sobre la gestión de la Oficina, sino que también establece una ruta de trabajo orientada a fortalecer la atención y protección de las personas usuarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N.º 8720. Su propósito es garantizar un servicio efectivo, oportuno y centrado en las víctimas de delito y demás intervinientes del proceso penal.

MARCO INTRODUCTORIO

La actual Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (en adelante O.A.P.V.D), inició sus labores en enero de 2000, con el nombre de *"Unidad de Información y Orientación a la Víctima"*; en su momento, el objetivo principal fue el de minimizar la revictimización o victimización secundaria de las personas afectadas por un hecho delictivo, promoviendo un trato más humanizado en estricto apego a sus derechos y mediante un enfoque psicosocial.

En el 2009, con la aprobación de la *"Ley N.º 8720, Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal"*, el servicio de atención y protección a víctimas y testigos que brindaba el Ministerio Público se reestructuró, creándose la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, para lo cual se asignó un presupuesto; a efectos de invertir en talento humano, iniciándose un proceso de fortalecimiento de personal profesional y de apoyo.



En la actualidad la O.A.P.V.D., es una dependencia que brinda un servicio público dirigido a promover y garantizar el ejercicio de los derechos y la participación de las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, como consecuencia de un delito. Esta labor que, por mandato de ley, se encuentra a cargo de equipos interdisciplinarios y equipos técnicos evaluadores está enfocada predominante a cumplir con el objetivo de ley, que es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento; así como, garantizar los principios rectores que rigen la citada normativa; a través de un trato digno y en coordinación con otras instituciones gubernamentales.

La labor de este despacho se fundamenta en proteger y acompañar a las víctimas y demás personas que participan en un proceso penal. Se prioriza el respeto, la confidencialidad, el acceso a la justicia y las situaciones de riesgo que vulneran su integridad física brindándose una atención integral y segura. Con ello, se contribuye a su participación en el proceso y a evitar nuevas afectaciones.

Específicamente, la O.A.P.V.D. se encuentra conformada por dos programas: el Programa de Protección que le corresponde el abordaje de los casos, en los cuales se determinó la existencia de una situación riesgo, que atenta contra la vida e integridad física de la víctima, testigo o sujeto interviniente en el proceso penal. Para cumplir con su cometido se dictaminan y ejecutan medidas de protección extraprocesales (recomendaciones de seguridad) que tienen como finalidad la contención del nivel de peligro en que puede encontrarse.

Por su parte, el Programa de Atención tiene como objetivo, fortalecer a las personas destinatarias de la ley que son partícipes de un proceso penal, por medio de un abordaje interdisciplinario con la finalidad de disminuir la revictimización, aminorar el impacto causado por el delito y promover el ejercicio de sus derechos para garantizar su participación proactiva en el proceso penal.



Al haberse incrementado el talento humano se logró ampliar su cobertura conformándose equipos técnicos evaluadores completos; tal como lo exige la normativa, en las principales cabeceras de provincia o en los circuitos judiciales de mayor afluencia o alta incidencia criminal.

A partir de la promulgación de la Ley N° 8720, y ante la necesidad de brindar un servicio público garante de los derechos a quienes requieren de los servicios, y con el fortalecimiento de este despacho; al 2025, se ha logrado integrar un equipo conformado por 176 puestos de trabajo que cubren todo el territorio nacional, pese a ello, uno de los desafíos que ha enfrentado la O.A.P.V.D. en los últimos años ha sido el no contar con los equipos de trabajo completos por falta de plazas e infraestructura, debido a la contención del gasto gubernamental a nivel del sector público, lo cual, ha provocado que algunas sedes regionales se desborden y se haya tenido que aplicar planes de trabajo remediales para no desmejorar la atención de las necesidades que presenta la población meta, que es considerablemente grande si se toma en consideración que el ámbito de aplicación de la ley refiere que se deben abarcar todos los hechos que constituyan delitos. (Código Penal y leyes especiales, vigentes y futuras).

En adición a lo expuesto, los altos niveles de criminalidad que ha enfrentado nuestro país en los últimos años permeado por el conflicto entre bandas criminales por disputas de territorio debido al comercio de drogas, los *"ajustes de cuentas"*, el sicariato y las extorsiones; entre otros, se han convertido en modalidades delictivas que han impactado la labor de este despacho. Como consecuencia de esta coyuntura ha sido necesaria la implementación de nuevas metodologías y estrategias para abordar estos casos, blindar los mecanismos de protección para garantizar la vida e integridad física de esta población usuaria y que su permanencia en los programas contribuya a su participación en el proceso penal con el objetivo primordial de evitar la impunidad.

Como uno de los aciertos institucionales, la apertura y conformación del equipo técnico evaluador JEDO (Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada) entró en funcionamiento desde el 2023, ha permitido realizar intervenciones profesionales diferenciadas a nivel nacional por la particularidad de los casos que son referidos, tomando en cuenta el perfil de las estructuras criminales que están vinculadas a los hechos delictivos que se denuncian o con motivo de distintas investigaciones.

Esta Oficina enfrenta hoy un escenario de alta complejidad, caracterizado por la violencia creciente vinculada al crimen organizado, mayor riesgo para víctimas y testigos, desconfianza y miedo social. En este contexto, el principal desafío no es solamente proteger, sino adaptar el modelo de atención a una nueva realidad criminal, donde la seguridad de quienes reciben los servicios se convierta en un componente esencial para garantizar la justicia; lo que la obliga a evolucionar hacia modelos de protección más integrales y sostenibles, esto implica una mayor inversión en recursos, mejor coordinación interinstitucional y estrategias de seguimiento a largo plazo.

Capítulo I.

Contexto Institucional y Planificación Estratégica.

El marco institucional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito en Costa Rica constituye un pilar fundamental dentro del Ministerio Público y general en el sistema de justicia, al reconocer a las personas víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal, como sujetos de derechos que requieren una atención integral, acompañamiento profesional y mecanismos efectivos frente a las consecuencias del delito. Esta instancia no solo responde a un mandato legal y ético de protección, sino que también refleja el compromiso del Estado con un enfoque humanizado de la justicia, centrado en la dignidad, la seguridad y la recuperación de quienes han sufrido alguna afectación como consecuencia de un hecho delictivo.

En este contexto, la planificación de sus objetivos y metas adquiere una relevancia estratégica, ya que permite organizar, orientar y optimizar los recursos institucionales para brindar servicios oportunos, especializados y de calidad. La adecuada articulación entre el marco normativo y la planificación institucional fortalece la capacidad de respuesta ante las necesidades de las personas usuarias, promoviendo su acceso a la justicia, la reducción de la revictimización y la restitución de sus derechos.



1.1 LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL MARCO ESTRATÉGICO (MISIÓN, VISIÓN Y VALORES).

En el contexto de la gestión pública, la rendición de labores reafirma el compromiso con la transparencia, la eficiencia y el servicio a la ciudadanía. En este sentido, resulta fundamental dar a conocer la misión, visión y valores que orientan su quehacer institucional, ya que estos constituyen la base sobre la cual se planifican, ejecutan y evalúan sus acciones. A través de estos principios, este despacho judicial procura garantizar una atención integral, oportuna y digna a las personas usuarias, al tiempo que fortalece la confianza pública en la institucionalidad y en el sistema de la administración de justicia.



Compromiso

Se trata de la disposición constante del personal de la O.A.P.V.D. para atender a las víctimas con responsabilidad, empatía y vocación de servicio, garantizando acompañamiento oportuno durante todo su proceso. Implica actuar con sensibilidad ante las necesidades de las personas afectadas por el delito, cumpliendo con los deberes institucionales y trabajando activamente para la protección de sus derechos y bienestar integral.

Excelencia

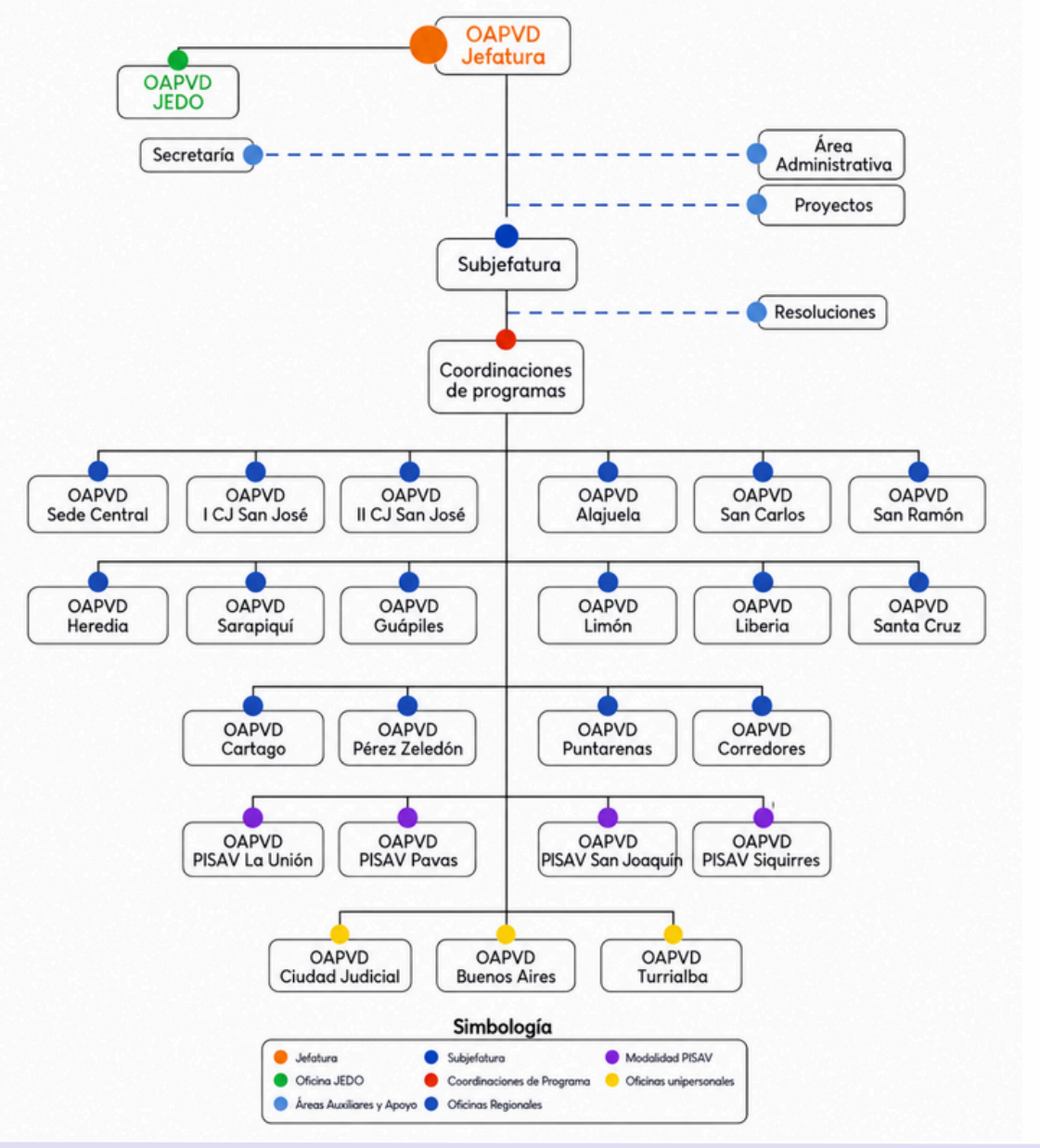
Es la búsqueda permanente de brindar un servicio de alta calidad, profesional, ético y eficiente. En la O.A.P.V.D., la excelencia se refleja en la mejora continua de los procesos, la capacitación constante del personal, la atención integral, humana y especializada, que responde adecuadamente a las diversas situaciones y vulnerabilidades de las personas usuarias que requieren de los servicios.

Integridad

Es actuar con honestidad, transparencia y respeto por la dignidad humana en todas las intervenciones con las personas víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Para esta Oficina, la integridad implica resguardar la confidencialidad de la información, aplicar la normativa con equidad y garantizar que cada actuación esté guiada por principios éticos; evitando cualquier conducta que discrimine o promueva la revictimización.



Como se muestra en el organigrama, este despacho se encuentra conformado por 24 sedes, con presencia en todas las provincias del país y específicamente donde operan los principales circuitos judiciales del país. Adicionalmente, se cuenta con equipos especializados en algunas zonas del país para la atención de casos relacionados con la violencia de género, persona adulta mayor y delitos sexuales en perjuicio de mayores de edad, específicamente en las plataformas integradas de servicios de atención a víctimas (PISAV), que operan en Pavas, La Unión, San Joaquín de Flores y Siquirres.



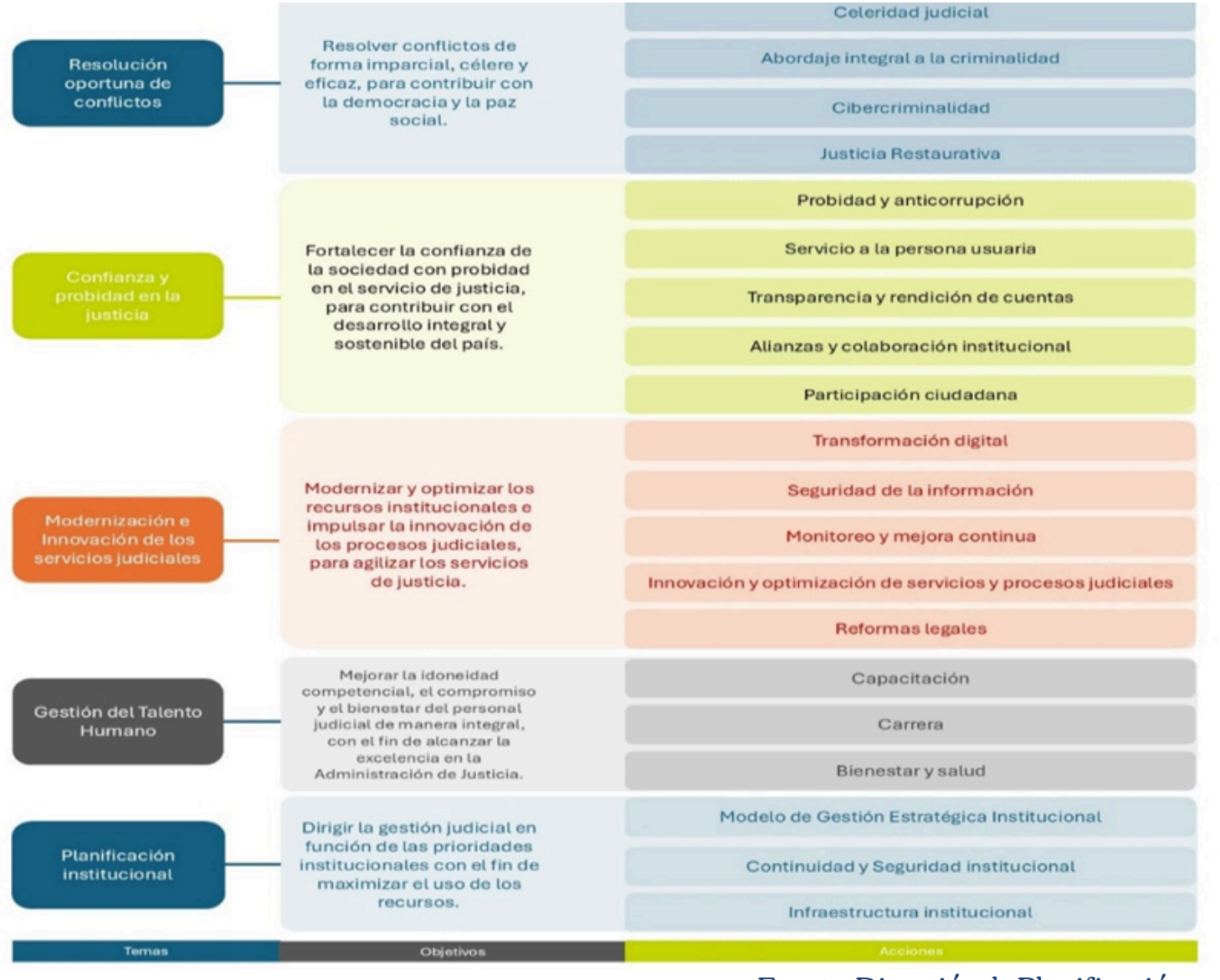
1.2 VINCULACIÓN DEL ACCIONAR DE LA O.A.P.V.D. CON EL PLAN ESTRATÉGICO DEL PODER JUDICIAL.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (O.A.P.V.D.) desarrolla su quehacer institucional en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial de Costa Rica. Este es el instrumento de gestión que define la ruta de la administración de justicia a mediano y largo plazo. Su objetivo principal es fortalecer la gestión institucional, consolidar el acceso a la justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Esta vinculación permite asegurar que sus acciones contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, particularmente en lo relativo al acceso a la justicia, la atención centrada en la persona usuaria y la protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Para el quinquenio 2025-2030 se ejecutaron por parte de la Dirección de Planificación varios talleres con la participación de las diversas oficinas que integran el Poder Judicial, dichos talleres permitieron desarrollar los temas, objetivos y acciones estratégicas.

Figura No. 1
Temas, objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2025-2030



Fuente: Dirección de Planificación

Como parte del proceso para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional participó el talento humano de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (O.A.P.V.D.) del Ministerio Público y de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV) del Organismo de Investigación Judicial, lo que contribuyó en la definición del PEI 2025-2030 para el programa 950, mediante el cual, se atenderán cuatro grandes temas:

Figura No. 2
Plan Estratégico Institucional 2025-2030
Metas Programa 950 Servicio a Víctimas



Fuente: O.A.P.V.D.

Para el año 2025 fue posible gestionar las siguientes tareas, en cuanto a las metas previstas.

Cuadro No. 1
Avances sobre las metas contenidas en el Plan Estratégico 2025-2030

Meta	Avances 2025
Estrategia de rendición de cuentas definida por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (O.A.P.V.D.) y la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV).	Por parte del personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima se sostuvo reuniones junto con el equipo de la fiscalía general encargado de atender el tema de Rendición de Cuentas. Las reuniones se efectuaron en junio y diciembre 2025 y entre otros temas, se logró revisar el instructivo que ha diseñado el Ministerio Público para la ejecución de este tipo de actividades.
Actualización de manuales y protocolos.	En 2025 se ejecutó un inventario de los manuales y protocolos con que cuenta la O.A.P.V.D. La información recopilada se trasladó a la jefatura, subjefatura, personal coordinador, lo que permitió analizar posibles documentos para valorar ajustes, eliminación o conjunción de datos.
Instrumento para evaluar el servicio brindado a las personas usuarias internas y externas de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (O.A.P.V.D.) y la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV).	En el 2025 se trabajó la metodología para medir los servicios de la O.A.P.V.D., esto; con el fin de desarrollar y ejecutar encuestas en el 2026.
Reforma de Ley N.º 8720 *"Ley de Protección a Víctimas Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal".*	Para el 2025 se definió el equipo destinado a trabajar en la reforma por medio de reuniones, se analizó que se mantienen en proceso reglamentos que son atinentes a la ley como: el Reglamento para la Administración del Fondo Especial para la Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal y el Reglamento Ejecutivo de la Ley N.º 8720 ambas normativas requieren quedar finiquitadas para incluirse dentro de la Reforma de la N.º 8720.

Fuente: elaboración propia.

Capítulo II.

Atención y Protección: Nuestros Servicios a la Ciudadanía.

OAPVD

2.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN. DINÁMICA, ALCANCES Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXTRAPROCESALES.

Las medidas de protección extraprocesales constituyen un conjunto de acciones preventivas, personalizadas y no jurisdiccionales que la O.A.PV.D. implementa; con el fin de disminuir o mitigar los riesgos derivados de la participación de personas en el proceso penal, conforme a lo dispuesto en el marco jurídico nacional e internacional, la Ley N.º 8720 y su Reglamento Autónomo; así como los Protocolos que regulan los Programas que mantiene la Oficina.



2.1.1 NATURALEZA Y DINÁMICA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXTRAPROCESALES

Estas medidas se caracterizan por ser:

1. **Confidenciales:** su contenido, alcance y ejecución se resguardan para evitar la revictimización o la divulgación de información indebida de las personas protegidas.
2. **Voluntarias:** requieren el consentimiento informado de la persona usuaria, quien asume un rol activo en su implementación.
3. **Gratuitas:** el acceso no implica costo económico alguno para la persona protegida.
4. **Adaptativas:** se diseñan de acuerdo con el nivel de riesgo, la condición de vulnerabilidad, el perfil de la persona; además el contexto particular de cada caso.

La dinámica en cuanto a su aplicación responde a un proceso técnico especializado, que comprende:

- Valoración integral del riesgo realizada por equipos técnicos interdisciplinarios conformados por las disciplinas de psicología, criminología, trabajo social y derecho.
- Diseño del plan de protección, que establece objetivos, medidas concretas y responsabilidades compartidas.
- Ajustes a la implementación de las medidas, las cuales pueden modificarse; según la evolución del riesgo.
- Monitoreo y seguimiento continuo, para evaluar la eficacia y cumplimiento del plan.
- Revisión o finalización de las medidas, cuando el riesgo disminuye o cesa.

2.1.2 ALCANCES DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXTRAPROCESALES

Las medidas extraprocesales no sustituyen las decisiones judiciales, sino que operan en el ámbito administrativo con un enfoque preventivo, y pueden abarcar:

- Recomendaciones de seguridad personal y familiar, orientadas a modificar rutinas, fortalecer redes de apoyo y reducir la exposición al riesgo.
- Acompañamiento psicosocial, que fortalece las capacidades de afrontamiento y resiliencia de la persona usuaria.
- Coordinación interinstitucional, con cuerpos policiales, instituciones del sector salud, educación y servicios sociales. Además; de otras que son rectoras en materia de niñez y adolescencia, mujeres víctimas de violencia de género, trata de personas y similares.
- Medidas de protección más gravosas, se determinan en casos de alto riesgo, destaca la reubicación temporal en un sitio seguro o lugar de hospedaje temporal, u otras acciones que impliquen cambios significativos en la rutina y modo de vida de las personas intervinientes en los procesos penales.
- Medidas menos invasivas, entre las que se pueden enunciar las recomendaciones de seguridad preventiva, patrullajes con Fuerza Pública, seguimiento telefónico-presencial del caso, entre otras que no afectan en lo esencial el diario vivir de la persona sometida a protección.

Asimismo, el alcance de dichas medidas está condicionado por:

- El nivel de peligro identificado previa valoración de situación de riesgo.
- La colaboración activa de la persona protegida en el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad.
- La orientación y el acompañamiento profesional por parte de los equipos interdisciplinarios.
- La articulación efectiva con otras entidades públicas que coadyuvan con la situación de protección de la persona usuaria.

2.1.3 EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La efectividad de las medidas extraprocesales depende de múltiples factores relacionados entre sí, como los que se describen de seguido:

a) Rol de los equipos técnicos evaluadores

Los equipos interdisciplinarios constituyen el eje central del programa, ya que:

- Realizan valoraciones técnicas objetivas y fundamentadas; según la gravedad de los hechos y el nivel riesgo identificado.
- Definen estrategias diferenciadas de acuerdo con las particularidades de cada caso, y según el perfil de la persona usuaria.
- Adaptan las medidas conforme a la evolución del entorno situacional., y al estado del proceso penal por el cual se encuentran en protección.
- Generan confianza en la persona usuaria, aspecto que favorece la adherencia al plan de protección implementado.
- Coordinan su ejecución apoyándose en la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del OIJ; conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N.º 8720.

b) Compromiso de la persona protegida

La eficacia de las medidas está directamente vinculada al cumplimiento de las recomendaciones, lo que implica:

- Cambios conductuales y de hábitos.
- Comunicación constante con la O.A.P.V.D.
- Reporte oportuno de nuevos eventos de riesgo.

c) Coordinación interinstitucional

La participación de otras instituciones del sector público y organizaciones no gubernamentales fortalece el programa al garantizar:

- Acceso a servicios complementarios (salud, alquiler de vivienda, seguridad social, educación y subsidios estatales).
- Intervenciones profesionales conjuntas en situaciones de alto riesgo.
- Respuesta integral y multisectorial; según las estrategias del plan de protección.

d) Enfoque preventivo y personalizado de las medidas. Medidas dirigidas a la contención del nivel de riesgo detectado y su seguimiento.

De acuerdo con la experiencia, las medidas de protección extraprocesales son más eficaces cuando:

- Se anticipan a escenarios de riesgo.
- Se adaptan a las características socioculturales de la persona o a su perfil victimal.
- Consideran factores como género, edad, contexto territorial, situación socioeconómica producto del delito, redes de apoyo, alta vulnerabilidad; entre otros.

En síntesis, las medidas de protección extraprocesales constituyen una herramienta esencial para garantizar la seguridad de las personas víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Su naturaleza preventiva, de adaptabilidad, confidencialidad; así como la anuencia y compromiso de la persona protegida, permite responder de manera oportuna a hechos de riesgo, siempre bajo el principio de corresponsabilidad entre la institución y la persona protegida.

El éxito del programa radica en la articulación efectiva entre su capacidad técnica y el compromiso asumido por quienes reciben las intervenciones profesionales; además del apoyo estratégico del Estado en su conjunto, lo que permitirá materializar uno de los objetivos fundamentales del citado programa que es garantizar las condiciones de seguridad que favorezcan la participación en el proceso penal sin poner en riesgo la integridad de las personas.

2.2 DINÁMICA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA O.A.P.V.D.

El Programa de Atención de la O.A.P.V.D. constituye un mecanismo de intervención interdisciplinaria orientado a fortalecer las capacidades personales, sociales y jurídicas de las personas destinatarias de la Ley N.º 8720 que enfrentan un proceso penal, sin requerir la implementación de medidas de protección extraprocesales.

2.2.1 NATURALEZA Y ENFOQUE DEL PROGRAMA

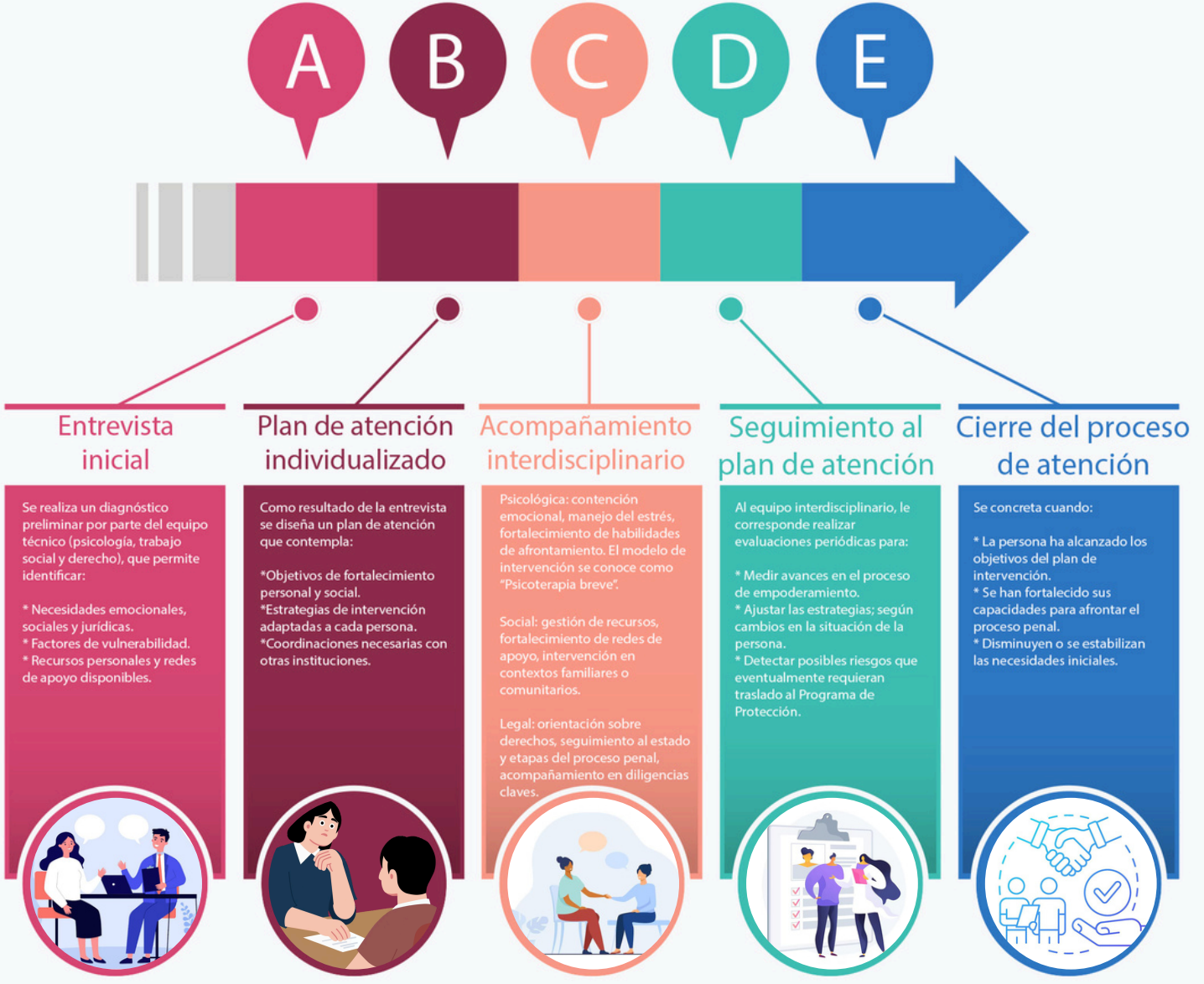
A diferencia del Programa de Protección, este modelo se fundamenta en un enfoque de acompañamiento integral y empoderamiento, dirigido a:

1. Promover la autonomía y resiliencia de las personas usuarias.
2. Brindar herramientas para una participación informada y segura en el proceso penal.
3. Reducir el impacto psicosocial derivado del delito y del propio proceso judicial.

Adicionalmente, se caracteriza igualmente por ser voluntario, gratuito y confidencial. No es restrictivo porque las personas no están en el deber de cumplir con las recomendaciones de seguridad como sí se requieren en el programa protección. Se encuentra centrado en la persona, respetando sus decisiones, tiempos y contexto.

2.2.2 Dinámica principal de intervención

El programa opera mediante una ruta de atención continua e interdisciplinaria, que comprende:



Fuente: elaboración propia.

2.2.3 EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La eficacia del Programa de Atención se sustenta en una intervención interdisciplinaria, que permite una visión integral de la persona, el vínculo de confianza, que facilita la adherencia al proceso, la participación de la persona usuaria, como sujeto de derechos y no solo como receptora de servicios. Finalmente, la articulación interinstitucional que garantiza el acceso a los servicios complementarios que brinda el Estado.

2.2.4 RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN

Ambos programas son complementarios dentro del marco de la Ley N.º 8720. El Programa de Atención opera en contextos donde no se identifican riesgos que requieran medidas de protección extraprocesal o debido a que las personas acogiéndose a su voluntariedad, declinaron las medidas que se determinaron desde el Programa de Protección. En algunos casos puede servir como fase previa al Programa de Protección, porque en su abordaje las personas profesionales pueden detectar situaciones de riesgo o peligro que ameriten el traslado al Programa de Protección para la implementación de medidas de protección extraprocesales.



Capítulo III.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA O.A.P.V.D.

3.1 LA O.A.P.V.D., EN CIFRAS. LA GESTIÓN DE CASOS.

El objetivo de este capítulo es mostrar el comportamiento de los casos ingresados, terminados y el circulante actual (casos activos o en trámite durante un período determinado); según el programa; además de los principales delitos relacionados con la intervención profesional y tendencias respecto a años anteriores.

3.1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE CASOS A NIVEL NACIONAL.

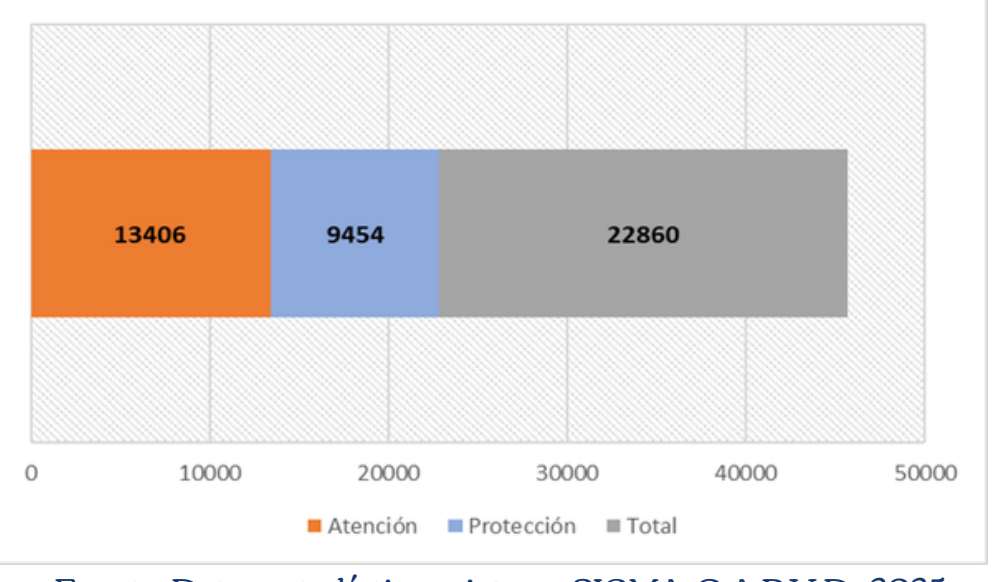
La normativa N.º 8720, Ley Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal, establece quienes son las personas usuarias o destinatarias de los servicios de la Oficina; es decir la población objetivo/usuaria; entre las que destacan, las víctimas directas, indirectas, colaterales, personas testigos; así como otras que intervienen en el proceso penal.

Aunque la normativa en su ámbito de aplicación denomina *"personas bajo protección"* a aquellas que están en riesgo por su participación directa o indirecta en un proceso penal, o bien por su relación con alguna que participa en dicho proceso, esta no se limita solo a las víctimas, sino que incluye a todas las personas que requieren los servicios de atención y asistencia como consecuencia de su participación en un proceso penal.

Dicho esto, de acuerdo con los registros estadísticos en el 2025 ingresaron un total de 22.860 casos, de los cuales 13.406 corresponden al Programa de Atención y 9.454 al Programa de Protección, lo que porcentualmente equivale a un 58% y 42% respectivamente, del total de asuntos ingresados.

En el siguiente gráfico, se proyecta la cantidad de casos ingresados en el 2025 en ambos programas.

Gráfico No.1
Casos ingresados por programa
2025



Fuente: Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025

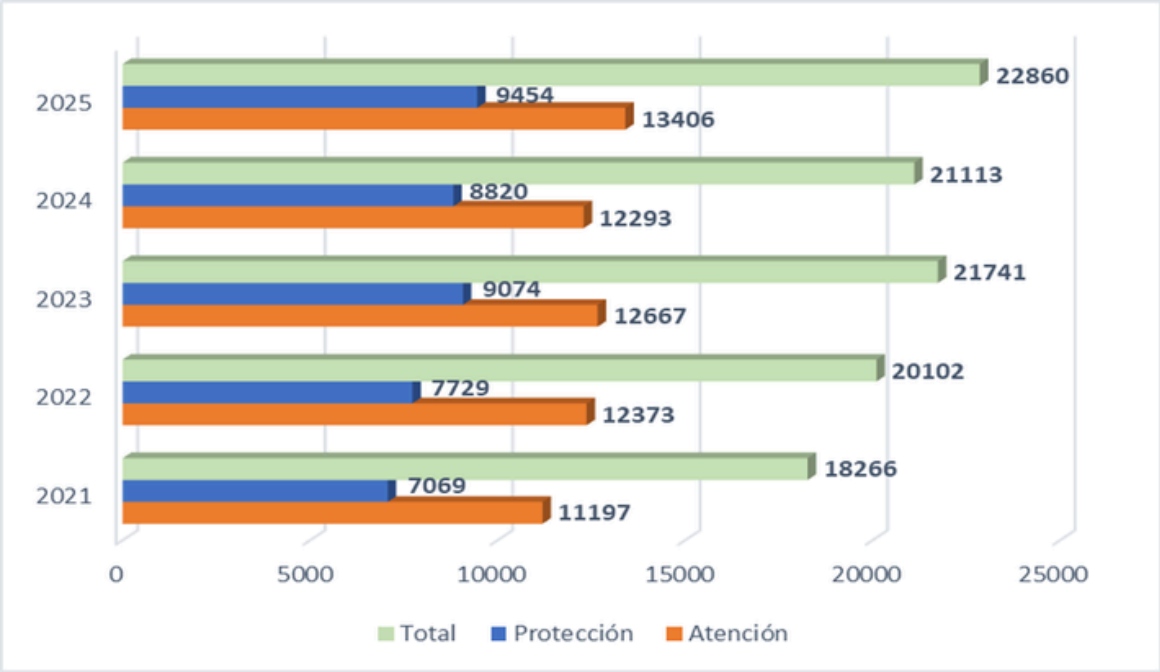
Al efectuar una comparación de los datos obtenidos en el 2024 (21.113), con el ingreso de casos de 2025 (22.860), se observa un crecimiento porcentual del 8%. Si se realiza este mismo análisis por programa, igualmente, se aprecia un crecimiento de asuntos en Atención y Protección que equivale a un 9% y 7%; respectivamente.

3.1.2 HISTÓRICO DE CASOS ENTRADOS

Como se indicó en un apartado anterior, la Ley N.º 8720 entró en vigor en el 2009, lo que permitió iniciar un proceso de fortalecimiento en cuanto a su estructura organizativa y un aumento significativo en el talento humano, lo que permitió ampliar la cobertura de los servicios manteniéndose presencia en todo el territorio nacional.

Seguidamente, en el gráfico, se proyecta la cantidad de casos entrados en los últimos cinco años en ambos programas.

Gráfico No.2
Histórico de casos entrados
2021-2025



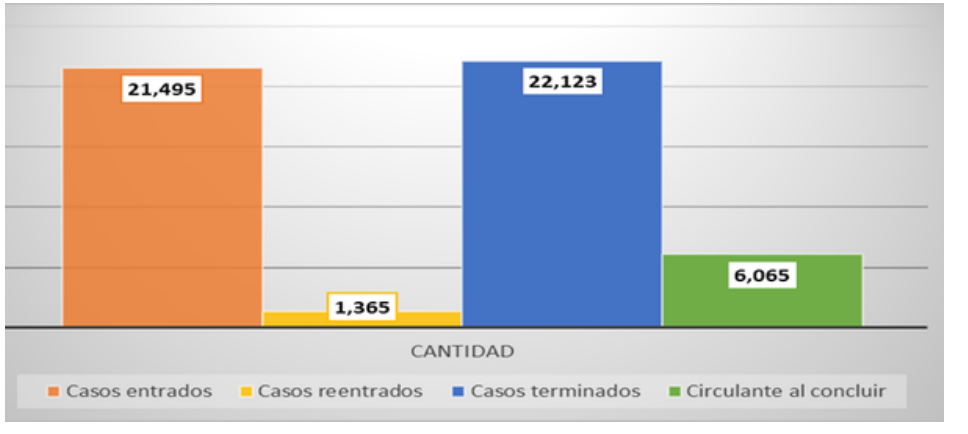
Fuente: Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025

De acuerdo con los datos consolidados en el gráfico anterior, la cantidad de asuntos ingresados a la Oficina ha venido en aumento en los últimos años. A manera de ejemplo, sí se toma como base el año 2021; respecto al 2025, el incremento porcentual es de un 25 %, lo que evidencia que la demanda en los servicios de la Oficina ha sido exponencial. Aunque, se experimentó una baja entre el período 2023-2024 de 628 casos, cuya disminución comprendió ambos programas, nuevamente en el 2025 se presentó un aumento con relación al 2024, de 1.747 casos lo que equivale al 8%.

En términos generales, el aumento de casos atendidos durante el 2025 puede estar relacionado con el crecimiento de la actividad delictiva en el país; especialmente de hechos vinculados con grupos de crimen organizado. Esta situación ha generado una mayor cantidad de personas víctimas directas, familiares afectados, otras impactadas por los hechos y testigos que requieren los servicios de la O.A.P.V.D. Asimismo, se ha observado la presencia de otras modalidades delictivas como las extorsiones asociadas a los llamados préstamos *"gota a gota"*; además, de un aumento en los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y otras formas de violencia basada en género.

A continuación, en el gráfico, se proyectan los resultados obtenidos de las principales variables estadísticas que conforman la carga de trabajo de este despacho.

Gráfico N.º 3
Casos entrados, reentrados, terminados y circulante final
O.A.P.V.D., 2025



Fuente: Datos estadísticos. O.A.P.V.D. 2025

De acuerdo con los datos anteriores, se observa que en el 2025 se finalizaron un total de 22.123 expedientes, de los cuales el 58% se tramitó desde el programa de Atención, mientras que un 42% en Protección. Al efectuar una comparación con los datos que reportó esta variable estadística en el 2024 (21.250), se obtuvo un crecimiento del 4%.

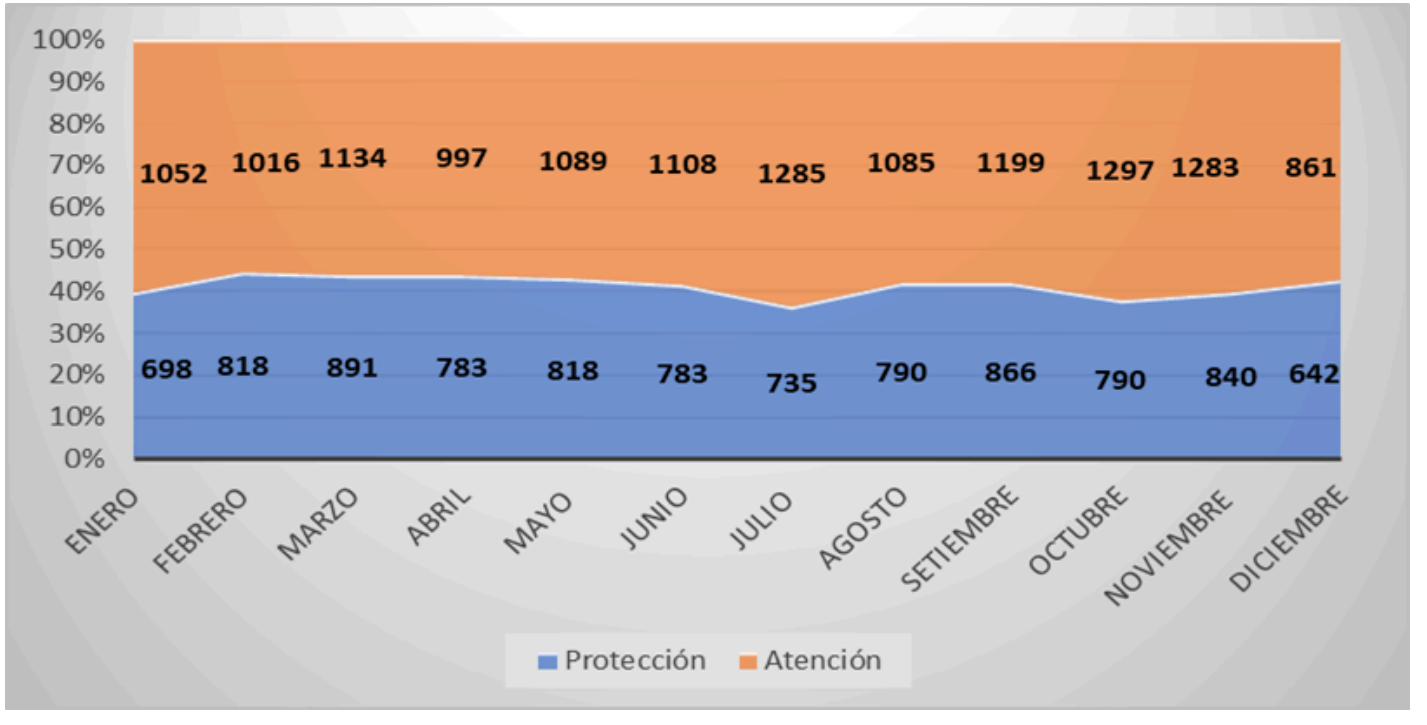
Esta Oficina concluyó en el 2025 con un circulante de 6.065 expedientes, el 72% se encuentra en el Programa de Atención, y el 28% en Protección.

3.1.3 CASOS INGRESADOS POR PROGRAMA

De acuerdo con la estructura organizacional de la O.A.P.V.D., contenida en el *"Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público"*, desde el ámbito operativo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9, los equipos técnicos evaluadores y equipos interdisciplinarios son los encargados de ejecutar los programas de la Oficina; según su orden, los primeros por disposición de ley atienden los casos que ingresan al Programa de Protección y los segundos el Programa de Atención.

En la actualidad esta dependencia se encuentra conformada por 24 sedes (oficinas centrales y 23 sedes regionales) distribuidas en todo el territorio nacional y donde se atienden los programas antes citados. Los resultados obtenidos, en cuanto a la variable casos entrados por mes y por programa, se describen; a continuación:

Gráfico No.4
Casos entrados por mes y programa
2025



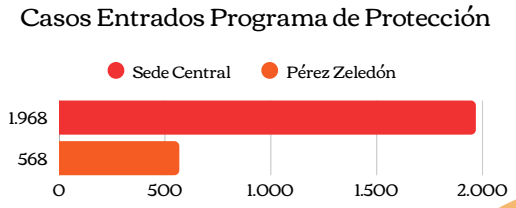
Fuente: Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025.

De los datos estadísticos anteriores, se desprende que, en Protección, la mayor cantidad de asuntos ingresaron en los meses de marzo, setiembre, y noviembre; mientras que, en Atención, los meses de julio, octubre, y noviembre, fueron los que reportaron un mayor ingreso superando los 1.200 casos.

3.1.4 CASOS ENTRADOS POR SEDE REGIONAL Y PROGRAMA.

En este apartado se realiza un análisis de las variables estadísticas expuestas en párrafos anteriores; según la sede regional y el programa, considerándose que las primeras diez presentaron un mayor ingreso. Aunque, existen ciertas particularidades en algunas regionales, en cuanto a la conformación del recurso humano o modalidad de atención, los datos y, el servicio público también se incorporan en las oficinas unipersonales de Turrialba, Buenos Aires y Ciudad Judicial (Complejo Forense ubicado en San Joaquín de Flores); así como modalidades de atención diferenciada, como el caso de la oficina que se ubica en el Primer Circuito Judicial de San José, y las Plataformas de Servicios de Atención a Víctimas, denominadas por sus siglas *"P.I.S.A.V."*, que operan en Pavas, La Unión, San Joaquín de Flores y Siquirres. El monitorear las estadísticas permite generar insumos importantes para la toma de decisiones; a partir de la carga de trabajo reportada por cada regional.

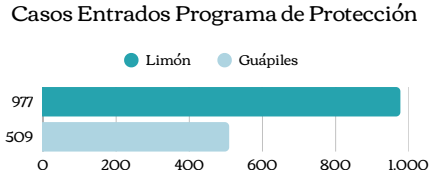




En cuanto al Programa de Protección, los resultados son los siguientes:

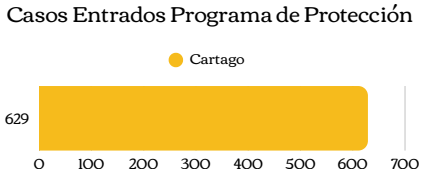


LIMÓN





CARTAGO



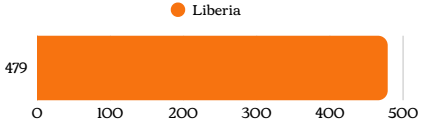
PUNTARENAS



Como se observan las diez sedes anteriores fueron las que reportaron un mayor ingreso, las cuales concentran el 74% del total de casos entrados y donde puede apreciarse que más personas fueron referidas al Programa de Protección, debido a que enfrentaron diversas situaciones de riesgo a su integridad física y seguridad personal como consecuencia de haber denunciado algún delito. Destaca en primer lugar Sede Central, seguida por la oficina de Limón y luego Cartago; en el orden correspondiente, reportaron 1.968, 977 y 629 casos entrados.

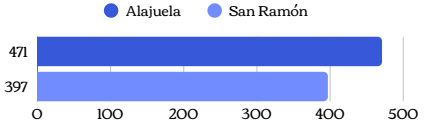


GUANACASTE





ALAJUELA

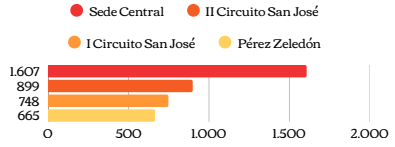


Nota: Corresponde a las primeras lO sedes regionales de mayor ingreso.
Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025.

Con respecto al Programa de Atención, se obtuvieron los siguientes datos:

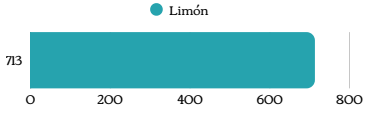


Casos Entrados Programa de Atención



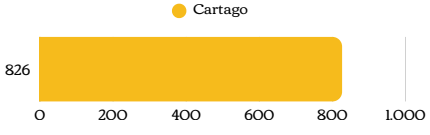


Casos Entrados Programa de Atención



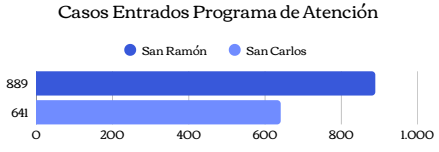


Casos Entrados Programa de Atención



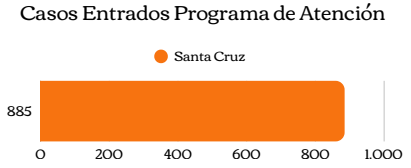


Casos Entrados Programa de Atención





Casos Entrados Programa de Atención



En cuanto al Programa de Atención, al igual que en Protección, Sede Central fue la oficina que recibió la mayor cantidad de casos en total 1.607, luego aparece el II Circuito Judicial de San José y San Ramón, con 899 y 889 asuntos ingresados; respectivamente. Debe indicarse que el tipo de caso que es referido a este programa está constituido por asuntos que son referidos desde Protección porque la persona usuaria no aceptó dichos servicios y solicitó al Programa de Atención, los requerimientos gestionados por la Fiscalía, Juzgados y Tribunales de Juicio para el acompañamiento profesional en diligencias como la recepción de denuncia, la audiencia preliminar, el juicio; entre otros. Aunado a ello, los casos atendidos en el contexto del *"Protocolo interinstitucional de atención integral a víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento"*.

Nota: Corresponde a las primeras 10 sedes regionales de mayor ingreso.
Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025.

3.1.5 CASOS TERMINADOS POR PROGRAMA

En ambos programas existen motivos, por los cuales un expediente o caso puede archivarse o finalizarse. En el caso del Programa de Protección, la Ley N.°8720 establece taxativamente en el numeral 12 inciso d), las causales de exclusión, como la desaparición del riesgo, la renuncia voluntaria, el incumplimiento de los deberes de las personas usuarias, entre otras; así como, el rechazo de los servicios del programa o las medidas de protección extraprocesales recomendadas, debido a que el ingreso o permanencia en el citado programa es de carácter voluntario; según lo que estipula el artículo 9 inciso i) de la misma normativa.



En el Programa de Atención se acreditan circunstancias que permiten el archivo o finalización de un expediente, como lo son, la finalización de la intervención profesional, el archivo del expediente ante un acto conclusivo en el proceso penal, el abandono o desistimiento a la intervención profesional, la finalización del proceso penal como resultado de una sentencia firme; entre otros.

A continuación, en el gráfico, se muestra la cantidad de expedientes finalizados por mes en cada uno de los programas.

Gráfico No.5
Cantidad de casos terminados y por programa
2025



Fuente: Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025.

En total se finalizaron 22.123 expedientes en ambos programas. De los cuales, 13.001 corresponden al Programa de Atención y 9.122 en el Programa de Protección.



En el 2025 a diferencia de años anteriores en el Programa de Protección, la cantidad de casos entrados supera a los terminados; siendo esta la dinámica que se espera a nivel estadístico; no obstante, la tendencia en los últimos años fue lo contrario, este resultado se obtuvo entre otras circunstancias porque el Programa es voluntario y pese a que se identifique un riesgo para la vida e integridad física de las personas referidas, sin su consentimiento no es posible incorporarlas a este o una vez ingresadas desisten, en cualquier momento por los motivos que se exponen.

En el Programa de Atención, al igual que el año anterior, los casos ingresados superan a los terminados, de igual modo, pese a que los servicios ofrecidos son voluntarios, este Programa es más flexible, por cuanto las personas usuarias no deben ejecutar medidas de protección extraprocesales, con la salvedad de que, mientras exista una causa penal activa la atención interdisciplinaria podrá brindarse.

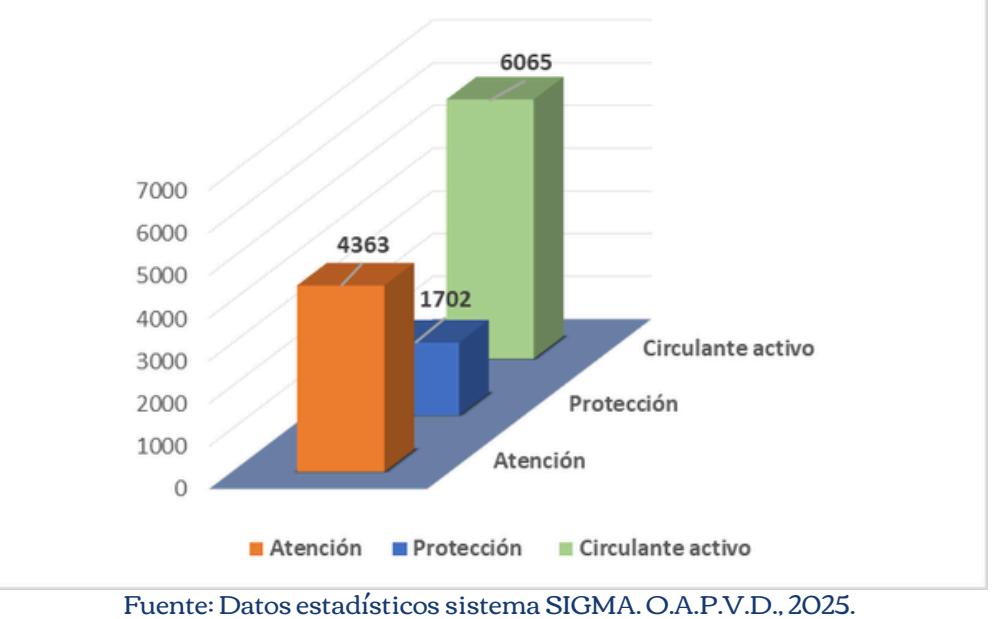
Las oficinas regionales que más cerraron casos en el Programa de Protección fueron Sede Central, Limón, Cartago y Pérez Zeledón, con 1974, 918, 568 y 560 expedientes. En Atención, destaca en el primer lugar nuevamente Sede Central, seguida por el II Segundo Circuito Judicial de San José, San Ramón y Ciudad Judicial; en su orden 1595, 891, 841 y 841 expedientes.

3.1.6 CIRCULANTE FINAL

El circulante que mantiene esta Oficina, al 31 de diciembre de 2025, se encuentra conformado por los expedientes activos que están en etapa de ejecución de medidas de protección extraprocesales, en el caso del Programa de Protección o en trámite con uno o varios servicios interdisciplinarios desde el Programa de Atención.

En el siguiente gráfico, se observa el circulante total activo al 31 de diciembre de 2025, desglosado por programa.

Gráfico No.6
Circulante activo
Al 31 de diciembre de 2025



Fuente: Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025.

Del gráfico anterior se observa que, en este despacho al 31 de diciembre de 2025, se cuenta con un total de 6065 expedientes activos, de estos, el 28% se encuentran en Protección para una cifra de 1702 expedientes y el 72% a Atención, que corresponde a 4363.

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS PENALES DE MAYOR INCIDENCIA, EN LOS CASOS ATENDIDOS POR LA O.A.P.V.D. EN AMBOS PROGRAMAS.

En este apartado de la rendición de labores, se ha estimado pertinente proyectar la incidencia de aquellos delitos, por los que son referidas las personas usuarias que requieren de los servicios. El analizar cuáles son los delitos que más frecuentemente generan casos en la O.A.P.V.D., permite, entender la realidad delictiva que afecta a las víctimas, facilitar la toma de decisiones informadas, diseñar nuevas estrategias de intervención, evaluar el trabajo de la oficina y fortalecer la coordinación institucional e interinstitucional.

Aunado a lo expuesto, los datos recopilados son útiles para retroalimentar a la fiscalía general de la República y otras instancias de decisión política del Poder Judicial, respecto al comportamiento o prevalencia de los diversos fenómenos delictivos, por los cuales las personas enfrentan situaciones de riesgo a su vida, integridad física y seguridad personal.

Seguidamente, se describen los delitos que tienen una mayor incidencia en la labor realizada por la O.A.P.V.D., en cada uno de los programas.

Cuadro No.4
Delitos de mayor incidencia
Programa de Protección

Delito	Protección
Amenazas Agravadas	2376
LP Maltrato	964
Agresión con Armas	762
LP Incumplimiento una medida protección	462
Amenazas personales	452
LP Amenazas contra una Mujer	414
Homicidio Tentativa de	378
Extorsión Simple	294
Daños	255
Homicidio Simple	204

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

Los tipos penales anteriores son aquellos que generan un mayor impacto en la labor realizada en este despacho, puesto que, representa en términos relativos el 67% del total de casos ingresados. Sí se toman los tres primeros, se observa que el delito de Amenazas Agravadas equivale al 25%, seguido por uno de los delitos de la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres, como es el de Maltrato y la Agresión con arma, ambos con una importancia relativa del 10% y 8%; respectivamente.

Cuadro No. 5
Delitos de mayor incidencia
Programa de Atención

Delito	Atención
LP Maltrato	2198
Amenazas Agravadas	1001
LP Incumplimiento una medida protección	972
Violación	829
LP Ofensas a la Dignidad	800
Abusos Sexuales Personas Menores Edad e Incapaces	674
LP Amenazas contra una Mujer	663
Agresión con Armas	537
Averiguar Muerte	447
Lesiones Culposas	379

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

En el caso del Programa de Atención, los tipos penales descritos en el cuadro que antecede agrupan el 63% del total de casos ingresados durante el 2025. De acuerdo con su importancia relativa, nuevamente el delito de Maltrato contenido en la Ley de Penalización de Violencia contras las Mujeres aparece como el de mayor incidencia, esta vez con un 16% del total de asuntos ingresados, luego se ubican las Amenazas Agravadas y otro correspondiente, a la violencia penalizada como es el Incumplimiento de Medidas de Protección, cada uno con proporción del 7%.

3.3 LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

La atención a las víctimas en condición de vulnerabilidad constituye un pilar esencial en cualquier sistema de justicia que aspire a ser legítimo, inclusivo y efectivo. Las personas en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres víctimas de violencia, migrantes, pueblos indígenas o personas en situación de pobreza, generalmente enfrentan barreras estructurales que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos. Por consiguiente, brindarles una atención diferenciada no es un *"acto de caridad"*, sino una obligación jurídica y ética respaldada por diversos instrumentos internacionales y nacionales.

En este contexto, las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad constituyen una referencia fundamental. Adoptadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana, estas reglas establecen lineamientos para garantizar que las personas en condiciones desfavorables puedan acceder de manera efectiva a la justicia, eliminando obstáculos y adoptando medidas de apoyo. Entre sus principios, destacan la necesidad de simplificar procedimientos, ofrecer asistencia legal adecuada, utilizar un lenguaje comprensible, asegurar un trato digno y respetuoso. Las Reglas de Brasilia reconocen que la igualdad formal ante la ley es insuficiente si no se acompaña o se complementan con medidas que subsanen las desigualdades reales.

Asimismo, otros instrumentos internacionales refuerzan esta obligación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8, el derecho a las garantías judiciales, que implica el acceso a un proceso justo y equitativo. Este derecho adquiere una dimensión reforzada cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, a quienes el Estado debe brindar protección especial. De igual manera, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), obliga a los Estados a adoptar medidas específicas para erradicar la discriminación y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, especialmente aquellas que enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad.

Por lo expuesto, se concluye que la atención y protección adecuada de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerabilizadas, también tiene un impacto directo en la calidad de la justicia. Cuando estas personas no reciben un trato diferenciado, es común que abandonen los procesos, no denuncien los hechos o sufran una revictimización institucional.

Lo descrito no solo afecta sus derechos individuales, sino que debilita la confianza en las instituciones. A diferencia, un sistema sensible a las condiciones adversas y particulares contribuye a una justicia más inclusiva, fortalece el Estado de Derecho y promueve la cohesión social.

3.3.1 DELITOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.

Pese a los esfuerzos institucionales de los últimos años, las violencias basadas en género siguen siendo uno de los fenómenos delictivos con mayor incidencia en el país. Este panorama exige mantener y reforzar todas las acciones investigativas, preventivas y de articulación interinstitucional que, a lo interno del Ministerio Público, se han venido desarrollando y al mismo tiempo, explorar nuevas estrategias que permitan abordar el fenómeno desde una perspectiva integral, humana y territorial.

Los antecedentes confirman que estas violencias se manifiestan en múltiples contextos, desde casos que involucran a personas que ocupan posiciones de poder y capacidad de influencia, hasta hechos asociados a la seguridad ciudadana en zonas caracterizadas por entornos altamente machistas. Esta diversidad de escenarios exige una respuesta institucional que observe el fenómeno desde todas sus aristas, reconociendo las intersecciones entre género, territorio, etnia, clase social, identidad y orientación sexual.

Cuadro No. 6
Casos ingresados según delitos de la
Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres

Delito LPVCM	Protección	Atención
LP Maltrato	964	2198
LP Incumplimiento una medida protección	462	972
LP Amenazas contra una Mujer	414	663
LP Ofensas a la Dignidad	122	800
LP Tentativa de Femicidio	100	109
LP Violación contra una Mujer	40	66
LP Daño Patrimonial	11	39
LP Femicidio	10	20
LP Sustracción Patrimonial	7	43
LP Restricción libertad de tránsito	7	31
Total	**2.137**	**4.941**

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

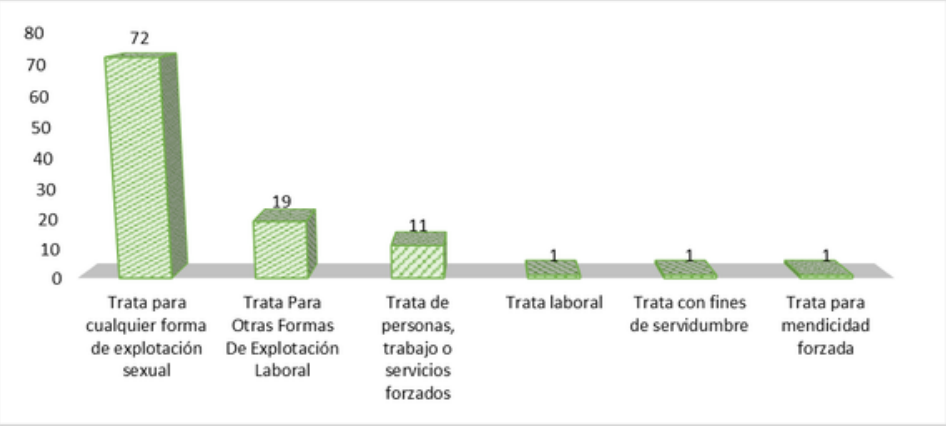
3.3.2 CASOS POR TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

La trata de personas es un delito que, aunque muchas veces permanece oculto, representa una de las formas más crueles de violencia y deshumanización. No se trata únicamente de una actividad ilegal más, sino de una práctica que despoja a las víctimas de su libertad, su dignidad y, en muchos casos, de su propia identidad. El ser sensible a este fenómeno implica reconocer que detrás de cada cifra existe una historia de dolor, engaño y vulnerabilidad. Las redes criminales que operan a nivel regional encuentran un terreno fértil en entornos caracterizados por la pobreza, la falta de oportunidades y exclusión social. En Costa Rica, su combate es crucial por su contexto regional y compromisos internacionales; así como por la necesidad de proteger a las personas víctimas más vulnerabilizadas.

En el contexto costarricense, por la Ley N.º 9095, Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, este despacho integra dicha coalición; al igual que el Equipo de Repuesta Inmediata *"ERI"*, éste último conformado por un cuerpo interinstitucional especializado cuyo objetivo primordial es la activación de medidas de atención primaria de las personas víctimas de trata y sus dependientes.

La O.A.P.V.D., brinda asistencia, acompañamiento, asesoría, y protección en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N.º 8720, en el artículo 15, respecto a las *"Reglas específicas de protección a víctimas del delito de Trata de Personas"*; así como, por el mandato legal que le confiere a esta Oficina la normativa 9095.

Gráfico No.7
Detalle de los Delitos de trata de personas atendidos en ambos programas
2025



Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

Conforme a los datos recopilados, durante el año 2025 se registró un total de 105 casos en ambos programas y sus respectivas modalidades. De este conjunto, la trata con fines de explotación sexual constituye la categoría de mayor incidencia, al concentrar el 69% del total de casos, seguida por la trata con fines de explotación laboral, que representa el 18%.

Además de la labor realizada en el tema de la Trata de Personas, también se atienden casos relacionados con el Tráfico Ilícito de Personas, los cuales se presentan con mayor prevalencia en las zonas fronterizas de nuestro país: San Carlos, Liberia y Corredores.

El tráfico ilícito de migrantes constituye un delito de carácter transnacional que no solo vulnera la soberanía y el control migratorio de los Estados, sino que también expone a las personas migrantes a múltiples riesgos que afectan gravemente su integridad física, psicológica y social. Esta actividad delictiva suele operar; a través de redes organizadas que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de quienes buscan mejores oportunidades, sometiéndolos a condiciones inseguras, explotación y, en muchos casos, a otras formas de criminalidad asociada.

En el caso de Costa Rica, los esfuerzos están dirigidos a articular políticas públicas integrales que permitan una respuesta coordinada frente a este fenómeno, incluyendo la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y el combate de delitos conexos.

En el 2025 se atendieron un total de 21 casos, 13 desde el Programa de Atención y 8 en Protección. Por las condiciones o el perfil de las víctimas de este ilícito en las sedes donde se atienden este tipo de casos; además, de velar por su seguridad en el territorio nacional, se procura suplir sus necesidades básicas como la alimentación, el hospedaje y la atención médica, mientras las autoridades judiciales y el Ministerio Público realizan las diligencias de investigación, y se lleva a cabo la Audiencia de Medidas Cautelares.



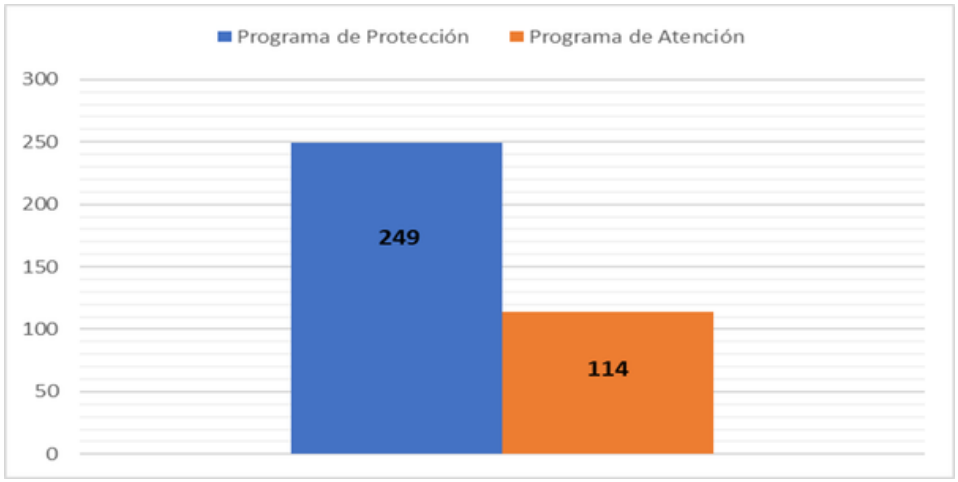
3.3.3 POBLACIONES INDÍGENAS

La atención y protección de las personas víctimas pertenecientes a pueblos indígenas requiere un abordaje diferenciado que reconozca y respete sus particularidades culturales, sociales y espirituales. En este sentido, la incorporación de su cosmovisión en los servicios que se brindan no sólo constituye un principio de respeto a la diversidad cultural, sino también una condición esencial para garantizar una intervención efectiva, pertinente y basada en derechos humanos.

Desde el 2021 y como resultado de una labor realizada por un equipo de trabajo conformado por profesionales de esta Oficina y la FAI, con el apoyo de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, se elaboró una adenda al *"Protocolo General para la Atención y Protección de Víctimas y Testigos con Enfoque Intercultural para la atención y protección de personas indígenas destinatarias de la Ley"*, que ha permitido reforzar las intervenciones profesionales.

Los casos atendidos de esta población usuaria, en ambos programas, se exponen de seguido.

Gráfico No. 8
Casos atendidos víctimas pueblos indígenas
2025



Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

En línea con lo anteriormente expuesto y como parte de su estrategia de abordaje diferenciado, la O.A.P.V.D., implementó un plan de giras a territorios indígenas. Estas acciones responden a diversos objetivos prioritarios para la institución y la ciudadanía; entre los cuales destacan:

1. La identificación y abordaje de personas para su eventual ingreso al Programa de Protección.
2. La realización de seguimientos disciplinarios a personas usuarias dentro del Programa de Atención.
3. La ejecución de charlas informativas y de sensibilización orientadas a promover el acceso a los servicios institucionales.
4. La intervención profesional en situaciones derivadas de conflictos por la tenencia de tierra, particularmente, aquellas que se encuentran en el marco de la Medida Cautelar N.º 321-12, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril de 2015.

Mediante estas giras, este despacho reafirma su compromiso de garantizar una atención integral, oportuna y culturalmente pertinente a las poblaciones indígenas, contribuyendo a la protección efectiva de sus derechos y al fortalecimiento del acceso a la justicia.

De seguido, se exponen los datos relativos a las visitas realizadas a los pueblos indígenas por parte de los equipos de este despacho durante el 2025.

Cuadro No. 7
Giras realizadas a territorios indígenas
2025

Sede de la O.A.P.V.D.	Territorio indígena visitado	Cantidad de visitas
Sede Central	Quitirrisí, Mora	1
Cartago	Chirripó, Sinoli, Grano de Oro, Shinakichá.	8
Limón	Aditibre, Aditibri, Aditica (Charla) Alto Cuen, Amubri, Bratsi, Bribrí, Shinakichá, Corbita, Hone Creek, Puerto Viejo, Sepecue I, Sepecue II Shiroles, Sixaola, Suretka, Telite Valle de la Estrella.	64
Buenos Aires	Bajo Coto, Bioley, Boruca, Cabagra, Cacique Changuena, Rey Curré, Liceo Rural de Ujarrás, Maíz de Boruca, Potrero Grande, Salitre, Salitre Cebror, Salitre Santa Rosa, Salitre Yeri, Salón A.D.I. Térraba, San Rafael de Cabagra, Térraba, Ujarrás	52
Corredores	Alto Laguna, Escuela La Isla, Centro Educativo Indígena San Rafael Norte, La Casona Coto Brus	5
		Total 130

De acuerdo con los datos anteriores, durante el 2025, se efectuaron un total de 130 visitas a pueblos indígenas, las que estuvieron a cargo de personas profesionales de las sedes que por competencia territorial atienden a esta población.

3.3.4 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

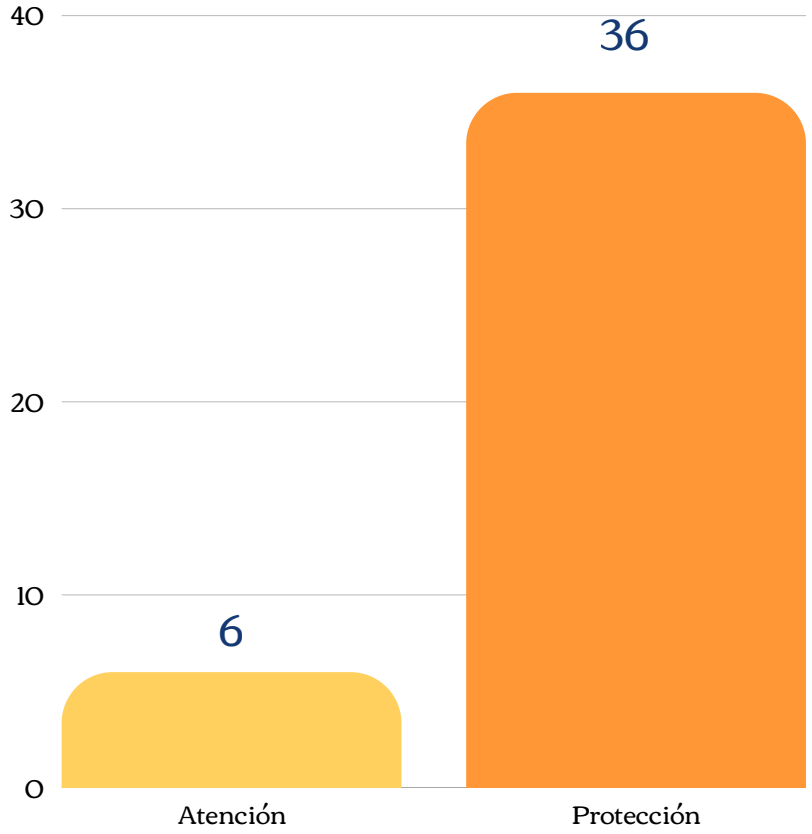
En el ordenamiento jurídico nacional, las personas privadas de libertad mantienen incólumes sus derechos fundamentales, salvo las restricciones propias de la pena impuesta. En este sentido, cuando una persona bajo custodia del Estado resulta víctima de un delito, surge una obligación por parte de las autoridades de garantizar su protección y atención integral, lo que implica actuar con la debida diligencia para investigar los hechos y proteger su vida e integridad física.

Los servicios son brindados aprovechándose el traslado de esta población hasta la Fiscalía para la interposición de la denuncia o mediante visita al centro penal donde estas personas están recluidas. La solicitud de intervención también puede ser gestionada desde la Defensa Pública de ejecución de la pena, el área jurídica del centro o por información recibida de un familiar.

En el 2025, ingresaron 42 casos a nivel nacional, de los cuales 36 fueron tramitados desde el Programa de Protección y 6 desde Atención.

Seguidamente, en el gráfico, se proyectan los resultados obtenidos.

Gráfico No. 9
Casos ingresados de personas privadas de libertad
2025



Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

3.3.5 ATENCIÓN DE CASOS RELACIONADOS CON EL "PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LAS PRIMERAS 72 HORAS DE OCURRIDO EL EVENTO."

En cumplimiento del *"Protocolo interinstitucional de atención integral a víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento"*, la O.A.P.V.D., ha mantenido una participación proactiva y articulada dentro de los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual (ERRVV), garantizando una intervención oportuna y especializada. En este marco, la gestión institucional se ha orientado al registro, sistematización y análisis de los casos atendidos, lo que permite dar seguimiento a la cantidad, características y evolución de las situaciones abordadas.

El acompañamiento a las personas víctimas de violencia sexual durante las diligencias preliminares es fundamental porque constituye una medida clave para garantizar tanto la protección de sus derechos como la efectividad del proceso penal. En esta etapa inicial, la víctima suele encontrarse en una situación de alta vulnerabilidad emocional, por lo que, la presencia de profesionales permite brindar contención, orientación y seguridad, reduciendo el riesgo de una revictimización secundaria.

Asimismo, este acompañamiento facilita que la persona comprenda el proceso, sus derechos y las diligencias que se van a realizar, lo cual contribuye a una participación más informada y voluntaria. Desde la perspectiva investigativa, también favorece la obtención de insumos de mayor calidad como resultado de una intervención reforzada y sensible

Las cifras estadísticas obtenidas como resultado de la atención realizada en el marco de este protocolo, se resume de seguido.

Cuadro No. 8
Acompañamientos víctimas de violencia sexual mayores de edad
(protocolo 72 horas)
2025

Provincia	Femenino	Masculino	Total
San José	76	7	83
Alajuela	24	3	27
Guanacaste	34	2	36
Heredia	22	4	26
Cartago	16	2	18
Puntarenas	8	0	8
Limón	5	0	5
Total	**185**	**18**	**203**

Fuente: Datos estadísticos sistema SIGMA. O.A.P.V.D., 2025.

Los datos anteriores evidencian que, durante el año 2025, las personas profesionales brindaron atención a un total de 203 víctimas de violencia sexual mayores de edad, en el marco del protocolo de las 72 horas. Esta labor implica la asistencia y el acompañamiento en diligencias esenciales, tales como la recepción de la denuncia, la valoración por parte de Medicatura Forense y el traslado a centros médicos para la aplicación de tratamientos profilácticos, incluyendo antirretrovirales. Asimismo, en aquellos casos en que se identifica una situación de riesgo que compromete la integridad física y la seguridad personal de la víctima, desde el Programa de Protección se realiza una entrevista; con el fin de valorar la adopción de medidas de protección extraprocesales orientadas a mitigar alguna situación de riesgo con motivo de los hechos denunciados.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor incidencia de casos se registró en la provincia de San José, que concentra el 41% del total (83 casos). Le siguen Guanacaste, con el 18% (36 casos), y Alajuela, con el 13% (27 casos). Por su parte, Heredia representa, igualmente un 13% (26 casos), Cartago el 9% (18 casos), mientras que Puntarenas y Limón presentan las menores proporciones, con un 4% (8 casos) y 3% (5 casos); respectivamente.

Respecto a la variable de género, se mantiene una marcada predominancia de víctimas del sexo femenino, que constituyen el 91% del total (185 casos), mientras que el sexo masculino representa el 9% (18 casos atendidos).



Capítulo IV.

EL MODELO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OTRAS PERSONAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL.

OAPVD

La víctimo-asistencia se define como el conjunto de servicios y actuaciones organizadas destinadas a responder a las necesidades de las personas víctimas de delito, proporcionando apoyo psicológico, social, legal y práctico; con el fin de mitigar los efectos de la victimización y promover su recuperación e integración. Este enfoque forma parte de una respuesta institucional orientada a garantizar los derechos de las víctimas y mejorar su participación en el sistema de justicia (Wemmers, 2013).

Este modelo es fundamental porque coloca a la víctima en el centro de la intervención, superando modelos tradicionales enfocados únicamente en la persecución del delito. La víctimo-asistencia permite atender de forma integral las consecuencias psicológicas, sociales y legales de la victimización, garantizando un trato digno, humano y respetuoso de los derechos humanos, en concordancia con estándares internacionales como los establecidos por Naciones Unidas (1985).

Aunado a ello, es adecuado para la O.A.P.V.D., porque responde a la complejidad de los casos que atiende, especialmente aquellos relacionados con violencia sexual, violencia basada en género, delincuencia organizada y en situaciones que, independientemente del tipo de delito, presentan niveles de alto riesgo por la gravedad de los hechos o las características de las personas atendidas. Estos contextos requieren intervenciones interdisciplinarias y especializadas, propias de la víctimo-asistencia, que integren acompañamiento emocional, criminológico, orientación legal y trabajo social; con el objetivo principal de reforzar las medidas de protección extraprocesales.

Este modelo implementado por la O.A.P.V.D., se caracteriza por un servicio de carácter público, gratuito, confidencial e interdisciplinar. Este trabajo interdisciplinario tiene su fundamento en la Ley N.°8720, artículo 6, en lo que interesa señala:

"...Corresponde a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, dentro de sus funciones de atención y asistencia a todas las víctimas de delitos, administrar el Programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.
Se crea la Unidad de Protección, como parte de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público; estará conformada por los equipos técnicos evaluadores que resulten necesarios, los cuales estarán integrados, al menos, por una persona licenciada en Criminología, una persona profesional en Derecho, una persona profesional en Psicología y una persona profesional en Trabajo Social o en Sociología, y un equipo de protección conformado por agentes de seguridad, perteneciente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)..."

Adicionalmente, según lo estipulado en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, en el Artículo 9, establece: *"Los equipos técnico-evaluadores y equipos interdisciplinarios son los encargados de ejecutar los programas de la Oficina".*

De acuerdo con este enfoque la O.A.P.V.D., desde el Programa de Protección, los equipos técnicos evaluadores, una vez valorado el caso, dictaminan y recomiendan, lo que se denomina medidas de protección extraprocesales que son *"aquellas acciones o los mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y los demás derechos de la persona protegida, pueden ser acciones ordinarias, acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas o extraordinarias para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo".*

Esto se traduce en un plan de protección conformado por estrategias que permitan el cumplimiento de dichas medidas; con el objetivo de minimizar o contener el nivel de riesgo detectado por los equipos que valoraron la situación de peligro en que puede estar una víctima, testigo u otro interviniente con motivo de su participación en el proceso penal.

Además del otorgamiento de las medidas de protección extraprocesales (recomendaciones de seguridad) que es una labor común y esencial desde el citado programa, también cuenta con profesionales de diversas disciplinas; en ambos programas, integrados en equipos conforme se detalló, quienes brindan los siguientes servicios:

- Atención psicosocial.
- Orientación y asesoría legal.
- Intervención en criminología.
- Acompañamiento en procesos judiciales.
- Referencias Interinstitucionales.
- Modalidad de atención presencial, virtual y telefónica.
- Atención personalizada mediante visitas domiciliarias y en alternativas de protección, centros hospitalarios, albergues y centros penitenciarios; entre otros.

En este capítulo, se describen los resultados más relevantes del trabajo de los equipos, destacando su carácter interdisciplinario en el abordaje a las personas usuarias. Este enfoque, se entiende como la integración de conocimientos y perspectivas diversas, necesarias para garantizar un servicio público integral y de calidad. Asimismo, por el perfil de las personas funcionarias que se destacan por su resiliencia, empatía y sensibilidad procurando un valor agregado a la gestión.

4.1 RESULTADOS ÁREA DE PSICOLOGÍA

Esta disciplina tiene a su cargo el brindar acompañamiento, abordaje en crisis, psicoterapias breves y los primeros auxilios psicológicos, con el objetivo de que las personas usuarias, como consecuencia de los hechos denunciados, pueden afrontar en mejores condiciones las secuelas y daño emocional; así como lograr una participación proactiva en las diferentes diligencias que conlleva el proceso.

A continuación, en el cuadro, se expone la cantidad de intervenciones que realizó la disciplina de psicología durante el 2025.

Cuadro No.9
Intervenciones profesionales en psicología
2025

Tipo de diligencia	Programa de Protección	Programa de Atención
Intervenciones psicológicas específicas	1703	3364
Primera intervención psicológica	107	554
Primeros auxilios psicológicos	94	171
Psicoterapia breve	311	1107
Total, de intervenciones	**2.215**	**5.196**

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

De acuerdo con los datos anteriores, las personas profesionales en psicología brindaron un total de 7411 intervenciones, de estas, las intervenciones específicas en cuanto a la atención que reciben las personas usuarias en ambos programas son las que tienen una mayor incidencia, seguidas por la modalidad de la psicoterapia breve, en conjunto abarcan el 88% del total de diligencias efectuadas.



4.2 RESULTADOS TRABAJO SOCIAL

Desde esta disciplina se emprendieron múltiples coordinaciones, enlaces interinstitucionales y planes de intervención para promover y mejorar la calidad de vida de las personas que requirieron de nuestros servicios. Este tipo de intervención o abordaje desde lo social es fundamental para quienes han enfrentado cambios importantes en su condición económica, laboral y comunal, como consecuencia de los hechos denunciados.

Cuadro No.10
Intervenciones profesionales en Trabajo Social
2025

Tipo de diligencia	Programa de Protección	Programa de Atención
Intervenciones sociales específicas.	1426	2062
Plan de Intervención social	537	819
Referencias institucionales	1050	966
Total, de intervenciones	**3.013**	**3.847**

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

En el caso de Trabajo Social se registraron un total 6.860 diligencias, de las cuales un poco más de la mitad, es decir; el 51% están relacionadas con intervenciones específicas desde lo social; tales como, seguimiento a casos, valoraciones socioeconómicas y coordinaciones con instituciones de bienestar social.

4.3 RESULTADOS DESDE EL ÁREA LEGAL

Las personas profesionales en derecho brindan sus servicios en ambos programas, sus labores están dirigidas a brindar un acompañamiento a las personas usuarias en la causa penal que originó el ingresó a esta Oficina, dar seguimiento al proceso, brindar asesoría jurídica sobre las distintas etapas del proceso penal y los actos procesales que corresponden a cada una, también se encargan de preparar a la parte ofendida o testigo para la asistencia a diligencias que se requieran, principalmente en la etapa de juicio.

La asesoría jurídica a las personas protegidas y aquellas que reciben los servicios desde Atención, puede ser de dos tipos: la presencial, que se brinda como resultado de una cita programada o en caso de que el usuario o usuaria se presente de forma espontánea; al igual que la telefónica que se trata de una modalidad reconocida como una buena práctica en el Poder Judicial y utilizada como alternativa para mantener a la persona ofendida en un proceso penal, debidamente actualizada respecto al estado de su expediente. Dicha modalidad ha contribuido a disminuir el ausentismo a las citas de seguimiento de esta disciplina y generado una disminución en los gastos de traslado y de inversión en tiempo.

Cuadro No. 11
Intervenciones profesionales en derecho
2025

Tipo de diligencia	Programa de Protección	Programa de Atención
Seguimientos legales	4893	9351
Asesorías legales (telefónicas y presenciales)	2745	6259
Total, intervenciones	**7.638**	**15.610**

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

Las personas profesionales en derecho realizaron un total de 23.248 intervenciones, de estas, el 61% se refieren a seguimientos sobre el estado de la causa penal que originó el ingreso del caso a alguno de los dos programas y el 39% corresponde a las asesorías legales tanto telefónicas como presenciales para una mejor comprensión del proceso, los alcances de las distintas diligencias; así como recomendaciones profesionales para un reconocimiento pleno de sus derechos.

4.4 RESULTADOS DISCIPLINA DE CRIMINOLOGÍA

A las personas profesionales en criminología, les corresponde brindar las medidas de seguridad y de autoprotección a quienes desde el Programa de Protección son referidas porque enfrentan situaciones que vulneran su integridad física y seguridad personal. Esta disciplina cuenta con formación para identificar perfiles criminales, analizar zonas de incidencia criminal, confeccionar estudios de seguridad en las viviendas donde se reubican a las personas y en los sitios de hospedaje que se utilizan como alternativas de protección.

Es importante destacar que, en el 2025 entró en ejecución el Protocolo sobre Estudios de Seguridad de Inmuebles y Análisis Criminológico de Infraestructuras comunicado mediante el Memorándum 12-O.A.P.V.D.-2025 de fecha 28 de agosto de 2025, cuya elaboración estuvo a cargo del área de Proyectos, lográndose actualizar el instrumento utilizado por el área de criminología, que permite establecer la seguridad con la que cuenta un recurso habitacional, al momento de concretar la medida de protección extraprocesal conocida como la *"reubicación domiciliar"*. Esta herramienta se denomina Estudio de Seguridad de Inmuebles (ESI) y se define como:

> *"Observación y análisis detallado de los elementos mínimos de seguridad de un inmueble y su entorno por parte de la persona profesional en criminología, con el fin de que sirva como insumo para la toma de decisiones por parte del ETE al momento de la ejecución de una medida de protección extraprocesal...". Quesada et al. (2025)*

Adicionalmente, se visualizó la necesidad de un nuevo instrumento llamado Análisis Criminológico de Infraestructura (A.C.I.), el cual se define como:

> *"Instrumento realizado por la persona profesional en criminología con el fin de identificar fortalezas y debilidades de un bien inmueble en materia de seguridad, que brinde información valiosa a los Equipos, así como a las personas usuarias de la O.A.P.V.D.". Quesada et al. (2025)*

De acuerdo con lo expuesto, en el citado protocolo ambos instrumentos son requeridos para apoyar la toma de decisiones del equipo técnico evaluador (E.T.E.), ante casos específicos y garantizar la correcta ejecución de una de las medidas extraprocesales recomendadas.

Adicionalmente, se encargan de elaborar la denominada *"Hoja de intervención criminológica"* que corresponde a un instrumento técnico elaborado para registrar y analizar el riesgo, la peligrosidad de la persona denunciada y la dinámica delictiva de un caso.

Cuadro No. 12
Intervenciones profesionales en criminología
2025

Tipo de diligencia	Programa de Protección
Hoja de intervención criminológica	1249
Estudios de Seguridad de Inmueble (ESI)	640
Total, intervenciones	**1.889**

Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

El total de intervenciones en criminología es de 1889. En el caso de la hoja de intervención criminológica esta debe estar incorporada en todos los expedientes ingresados al Programa de Protección, mientras que la confección de los estudios de seguridad dependerá del tipo de medidas extraprocesales otorgadas, ya que no es requerida en todos los casos.

4.5 ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LAS PERSONAS USUARIAS Y LA MODALIDAD DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DENOMINADA "VISITAS DOMICILIARIAS".

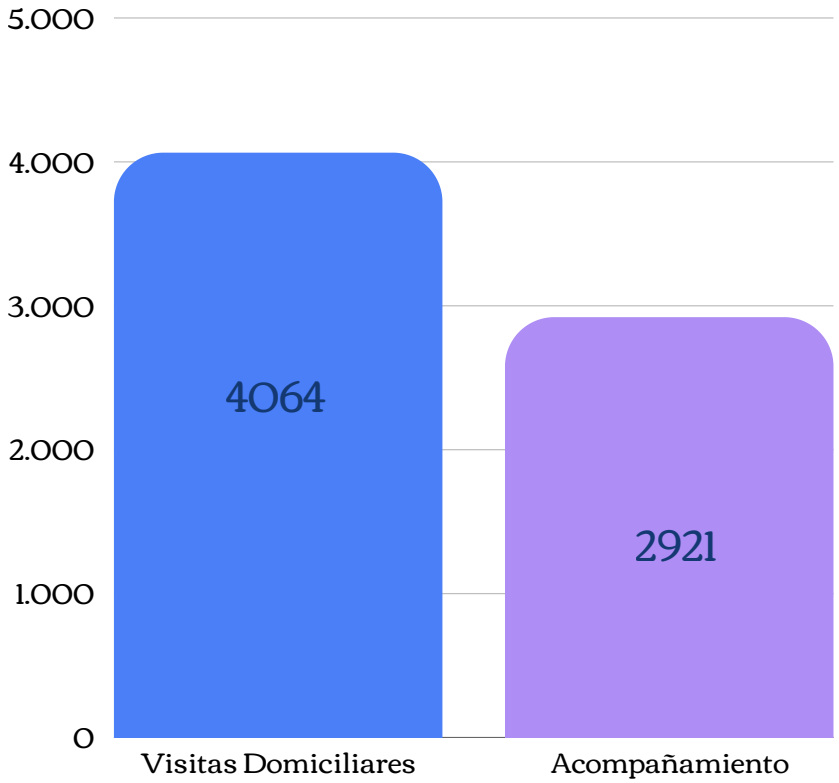
Uno de los principios rectores que orientan el accionar del modelo de atención integral es la *"Accesibilidad a la justicia para todas las víctimas"* y en general para aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Este despacho continúa realizando esfuerzos para garantizar que los servicios sean sostenibles a lo largo del proceso, evitar y mitigar la revictimización promoviendo mecanismos para derribar aquellas barreras que podrían dificultar su derecho a recibir los diversos servicios.

Por este motivo, se brinda acompañamiento y asistencia a diferentes diligencias o actos procesales, a solicitud de la autoridad judicial o por recomendación de los equipos técnicos evaluadores e interdisciplinarios. Aunado a ello, se ha venido desarrollando como una buena práctica la atención personalizada en el domicilio de la persona víctima o en la alternativa de protección en qué se encuentre, ante circunstancias específicas o particulares (discapacidad, enfermedad, incapacidad temporal, falta de recursos económicos y escasas redes de apoyo). Previamente a la visita, se verifican las condiciones de privacidad y seguridad de todas las personas involucradas en la atención. De considerarse que, se trata de una zona de alta incidencia criminal las personas profesionales son acompañadas por los y las agentes de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del OIJ (UPROV).

Con relación a los acompañamientos profesionales, se encuentran la recepción o ampliación de la denuncia, el reconocimiento físico en rueda de personas o reconocimiento fotográfico, la valoración médico forense, declaración en audiencia oral y pública (juicio), audiencias preliminares; así como, audiencia en materia de violencia doméstica y familia, cuando se considere pertinente, Anticipo jurisdiccional de prueba, diligencias a otras entidades (centros hospitalarios, albergues, instituciones del sector público); entre otras.

En el siguiente gráfico, se muestra la cantidad de visitas domiciliares y los acompañamientos profesionales, por tipo de diligencia, que se realizaron en el 2025.

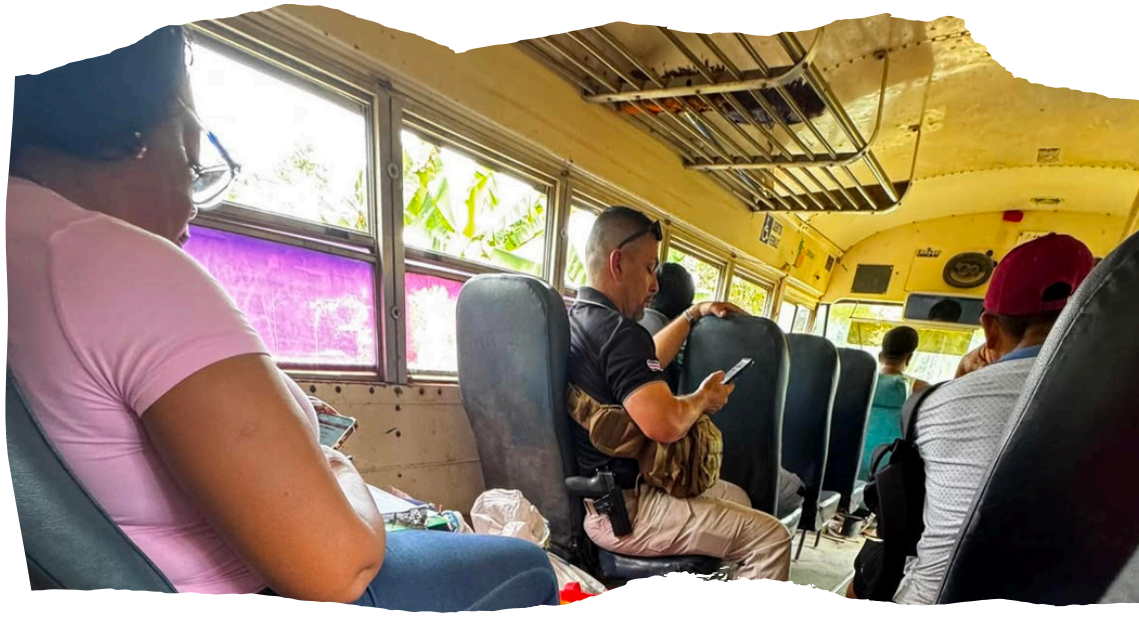
Gráfico N°10
Acompañamientos profesionales y visitas domiciliares
2025



Fuente: Datos estadísticos, O.A.P.V.D. 2025

De acuerdo con los datos proyectados en la gráfica anterior, en el 2025, se realizaron un total de 2.921 acompañamientos profesionales, de los cuales el 85% (2.481) se efectuaron desde el Programa de Atención y el 15% (440) en Protección. En este tipo de diligencias predominan los acompañamientos a debate, recepción de denuncia, audiencias preliminares, centros médicos para la atención en salud; así como, la asistencia para el reconocimiento de personas dentro del ámbito penal.

Asimismo, se efectuaron un total de 4.064 visitas domiciliares en ambos programas a nivel nacional, siendo que, el 68% corresponde a Protección y el 32% a Atención.



4.6 INSUMOS CONFECCIONADOS POR LOS EQUIPOS TÉCNICOS SOBRE LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO DE LAS PERSONAS USUARIAS EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROCESALES Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL PROCESO PENAL.

4.6.1 INFORMES TÉCNICOS DE VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO PARA DILIGENCIAS PROCESALES.

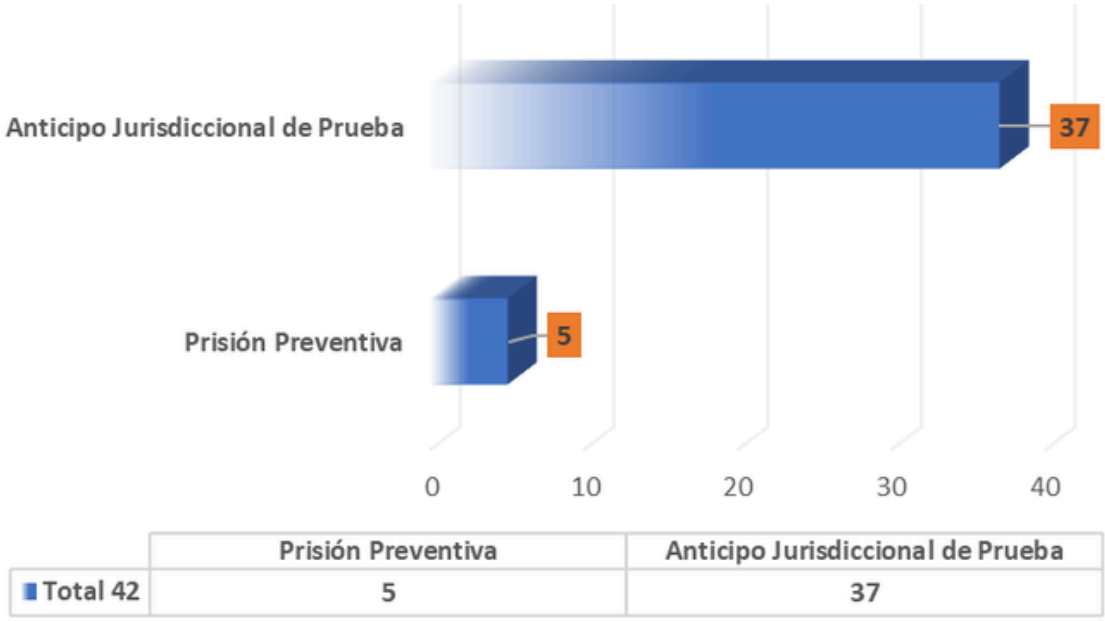
Esta dependencia en el marco de las competencias que le confiere la Ley N.º 8720, tiene como finalidad primordial garantizar la protección integral de los derechos de las personas víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal. Asimismo, le corresponde regular y ejecutar las medidas de protección extraprocesales; así como establecer el procedimiento aplicable para su implementación.

En resguardo de dichos derechos fundamentales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 bis del Código Procesal Penal, el Ministerio Público podrá requerir a esta dependencia la elaboración de un informe técnico especializado que acredite la existencia de una situación de riesgo, su grado de intensidad y la necesidad de adoptar medidas de protección procesal. Este documento constituye un insumo relevante para fundamentar solicitudes; tales como la imposición de medidas de protección procesal, la prisión preventiva o la práctica del anticipo jurisdiccional de prueba, en atención a los principios de proporcionalidad, necesidad y tutela efectiva de las personas en condición de vulnerabilidad.

El artículo 3 inciso d) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, se refiere al informe técnico como aquel criterio técnico que podrá rendir el equipo técnico evaluador o la persona profesional *"...que sustente la existencia de riesgo contra la vida e integridad física de las personas referidas y la importancia de su intervención en la causa, con el propósito de ser presentado por la parte gestionante ante la autoridad jurisdiccional para fundamentar sus requerimientos. Dichos informes se clasificarán según su naturaleza y objetivos".*

Seguidamente, en el gráfico, se muestran los resultados de la actividad desplegada por los equipos técnicos evaluadores a nivel nacional, en relación con los informes técnicos.

Gráfico No. ll
Cantidad de informes técnicos por tipo e informes breves por delito
2025



Fuente: elaboración propia, registros del Programa de Protección. 2025

De conformidad con los datos anteriores, se visualiza que durante el 2025 se confeccionaron un total de 42 informes técnicos, de estos, 37 para Anticipo Jurisdiccional de Prueba y 5 para Protección Procesal. En cuanto a la incidencia de este tipo de insumo la oficina de Puntarenas, Sede Central y Heredia, fueron las que confeccionaron una mayor cantidad, al representar el 38%, la primera, mientras que, las otras dos sedes, cada una el 17%. En comparación al 2024, se observa un decrecimiento que equivale al 41%.

4.6.2 INFORMES DE SITUACIÓN DE RIESGO PARA FUNDAMENTAR LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

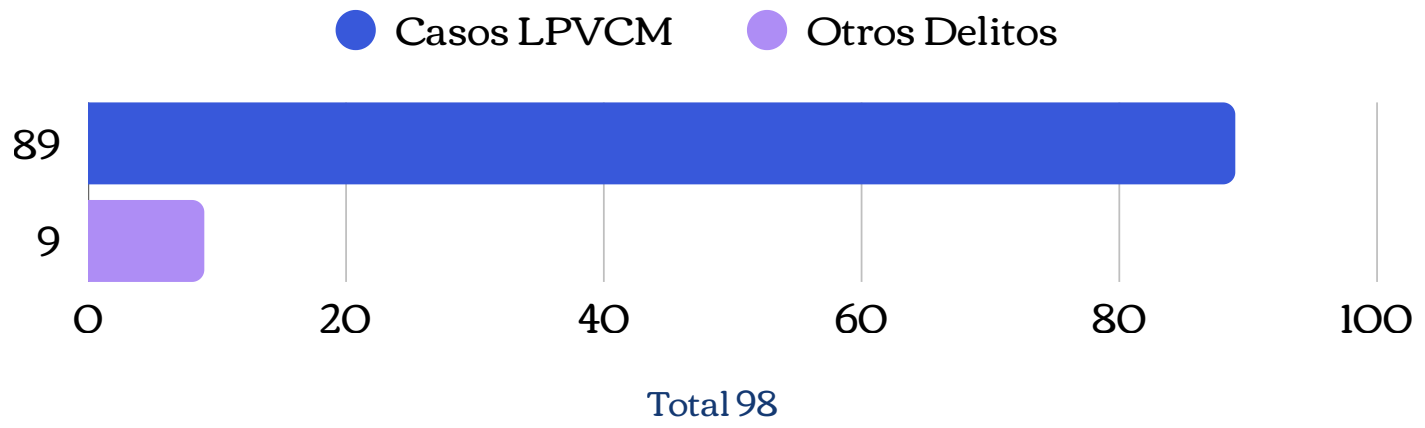
Adicionalmente a los informes técnicos ordinarios, se elaboran los denominados *"Informes de situación de riesgo para fundamentar la solicitud de medidas cautelares"*, particularmente en asuntos vinculados con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y otros delitos de especial sensibilidad. Este tipo de informe se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 239 del Código Procesal Penal y responden a la necesidad urgente del Ministerio Público de poner a la orden de la autoridad jurisdiccional a la persona imputada, cuando la representación fiscal no dispone de los insumos suficientes para la elaboración inmediata de un informe técnico integral mediante el procedimiento ordinario establecido.

En dichos documentos se consigna un criterio técnico preliminar debidamente fundamentado, en el que se identifican y detallan los principales factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad de la persona en cuestión; al igual que la valoración de eventuales riesgos procesales relevantes en el caso concreto. Lo anterior, con el fin de coadyuvar en la adopción oportuna de medidas cautelares idóneas, bajo los principios de protección efectiva, urgencia, proporcionalidad y necesidad.

En cuanto a este insumo utilizado para fundamentar la solicitud de medidas cautelares, se confeccionaron un total de 98 informes, de los cuales, el 91% corresponden a tipos penales contemplados en la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres, mientras el 9% a otros delitos; tales como, Homicidio Calificado, Amenazas Agravadas, Lesiones, Daños, Trata de Personas; entre otros.

A continuación, en el gráfico, se proyectan los resultados anteriores.

Gráfico N°12
Cantidad de informes en situación de riesgo por tipo de diligencia
2025



Total 98

Fuente: elaboración propia, registros del Programa de Protección. 2025

En cuanto a la frecuencia relativa que tiene este documento en la O.A.P.V.D., destacan las sedes de Liberia, Puntarenas, Corredores y Sede Central, donde se concentró el 61% del total de informes emitidos.

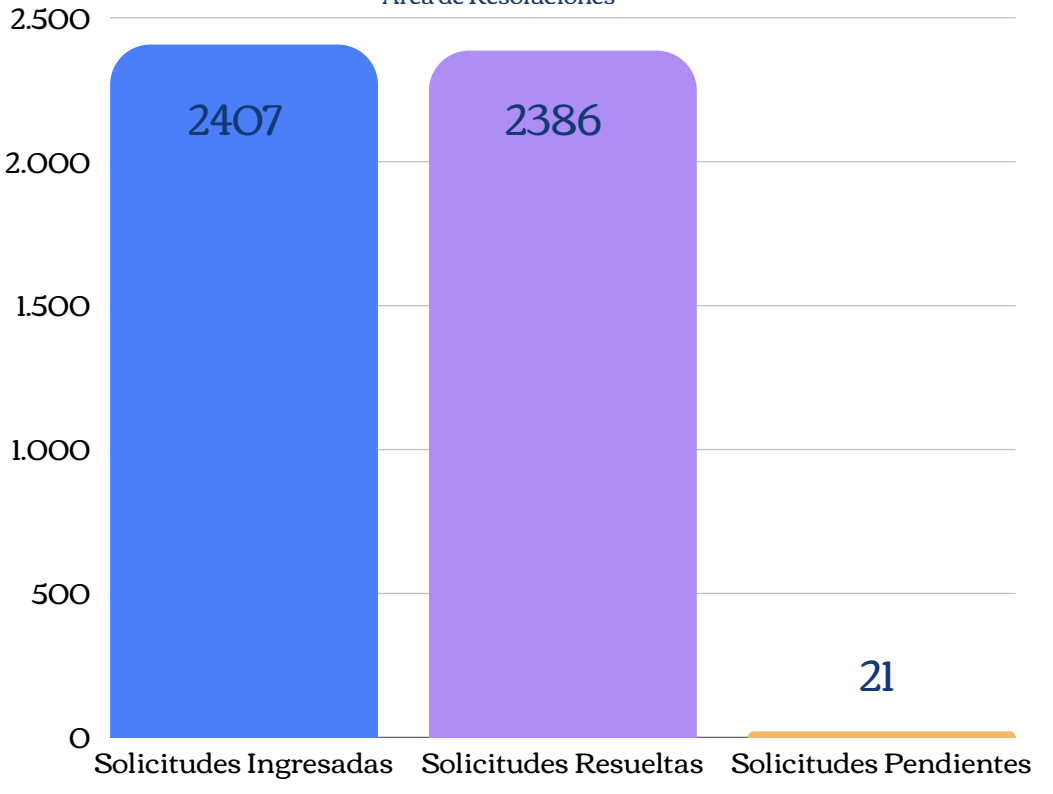
4.6.3 RESULTADOS CUANTITATIVOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL ÁREA DE RESOLUCIONES.

La O.A.P.V.D., cuenta con un área encargada de la revisión de los expedientes internos de protección, con el propósito de elaborar los proyectos de resoluciones correspondientes a la exclusión o modificación de las medidas de protección extraprocesales; así como de los recursos de revocatoria que se interpongan, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso c), de la Ley N.º 8720.
Una vez confeccionados dichos proyectos, corresponde a la subjefatura y/o jefatura de la oficina su revisión, validación y aprobación definitiva; en ejercicio de sus competencias funcionales.

En lo que respecta a los recursos de apelación presentados por las personas protegidas, su conocimiento y resolución corresponde a la fiscalía general, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, inciso g), numeral 2), de la Ley N.º 8720.

La gestión estadística de los asuntos atendidos durante el 2025 en esta área se resume en el siguiente gráfico.

Gráfico N°13
Solicitudes de exclusión ingresadas, resueltas y pendientes de resolver
Área de Resoluciones



Fuente: Elaboración propia, datos del Área de Resoluciones, O.A.P.V.D. 2025

El gráfico anterior muestra que del total de 2.407 solicitudes de exclusión que ingresaron a la citada área en el 2025, quedaron pendientes de tramitar 21, lo que refleja una efectividad del 99%.

A continuación, en el cuadro, se expone la labor realizada por el área de resoluciones, de conformidad con el motivo de exclusión, cambio de medida de protección extraprocesal o recurso.

Cuadro No.13
Casos tramitados según tipo de resolución

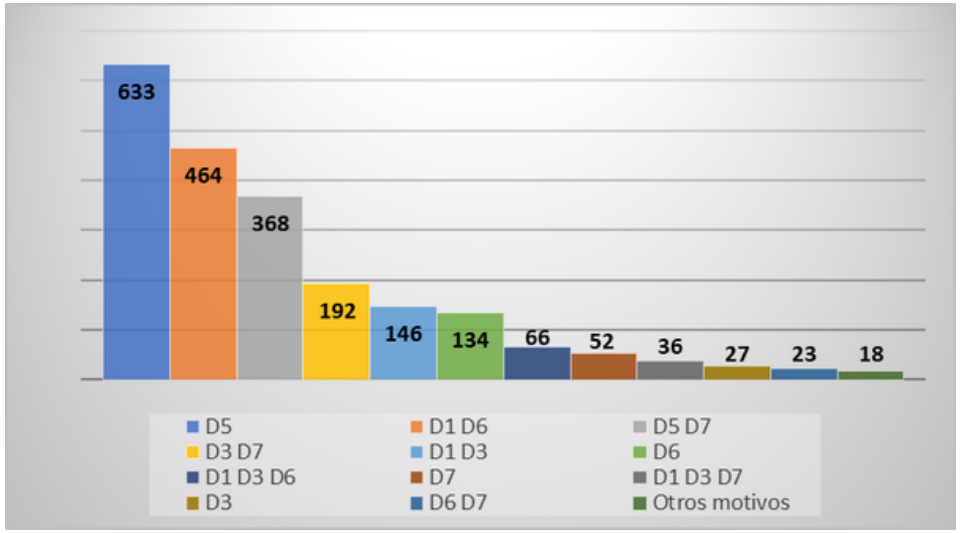
Tipo de Resolución	Aprobadas	Rechazadas	Total
Solicitud de exclusión	2159	31	2190
Cambio de medida	176	16	192
Recurso de revocatoria	2	1	3
Recurso de apelación	0	1	1
Total	**2.337**	**49**	**2.386**

Fuente: Elaboración propia, datos del Área de Resoluciones, O.A.P.V.D. 2025

Según los datos proyectados del total de solicitudes tramitadas por esta área (2.386), el 91,8% corresponde a exclusiones, el 8% a cambios de medidas de protección extraprocesales y el 0.2% a recursos. De igual forma, en cuanto a su resultado el 98% se trata de resoluciones aprobadas y el 2% rechazadas, incluyendo un recurso de revocatoria y otro de apelación, este último rechazado por parte de la fiscalía general, confirmándose la resolución emitida por este despacho.

En el siguiente gráfico, se describen los principales motivos, por los que se puede excluir a las personas usuarias del Programa de Protección, previo dictamen de los equipos técnicos evaluadores y, en consecuencia, finalizar las medidas extraprocesales en ejecución.

Gráfico N°14
Causales de exclusión del Programa de Protección a víctimas



Fuente: Elaboración propia, datos del Área de Resoluciones, O.A.P.V.D. 2025

Descripción de los motivos, artículo 12 inciso d), Ley N.°8720.

D1. Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley. **D2.** Ante la negativa injustificada de colaborar con la administración de justicia.	**D3.** Realizar conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, para garantizar la eficacia de las medidas acordadas.	**D4.** Proporcionarles, deliberadamente, información falsa a los funcionarios o empleados de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, a fin de ser incluido en el Programa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.
D5. La desaparición del riesgo.	**D6.** Cuando la persona protegida renuncie, voluntariamente, al Programa.	**D7**. Cualquier otra circunstancia razonable que haga innecesario el mantenimiento de la medida.

Según los datos contenidos en el gráfico anterior, del total de resoluciones tramitadas, el 29% corresponde a la causal, *"Desaparición del riesgo"*, seguida en importancia relativa por las causales D1-D6; siendo que ambas, representan un 22%, en un tercer lugar aparece el D5-D7 que representan el 17%. La cifra base que se utiliza para obtener estos porcentajes corresponde a las solicitudes de exclusión ordinarias que fueron aprobadas (2159) excluyéndose las que fueron rechazadas; así como las resoluciones que corresponden a cambios de medidas de protección extraprocesales y los recursos.

Uno de los indicadores clave corresponde a la causal de *"Desaparición de riesgo"*, la que se vincula directamente con el cumplimiento de las medidas de protección extraprocesales y, en términos generales, con la efectividad y éxito del plan de protección. En este sentido, al considerar los datos presentados en el gráfico anterior, se observa que las resoluciones emitidas bajo esta causal representan el 46% del total de casos ingresados al área de Resoluciones durante el año 2025, lo que evidencia el impacto significativo de esta categoría dentro del flujo total.

Uno de los principales retos que enfrenta el Programa de Protección es lograr que la mayor cantidad de personas usuarias, se mantengan ejecutando las medidas de protección extraprocesales mientras que el expediente penal se encuentre activo o en trámite. No obstante; en virtud de que este programa por ley es voluntario las personas renuncian por diversos motivos.

Durante el 2025, del total de casos ingresados al programa, 693 personas decidieron renunciar al programa, acogiéndose al principio de voluntariedad que regula la normativa N.°8720 en el artículo 9, inciso i) renuncia voluntaria. Los principales motivos o razones que las personas brindaron o los equipos plasmaron en la solicitud de exclusión son los siguientes:

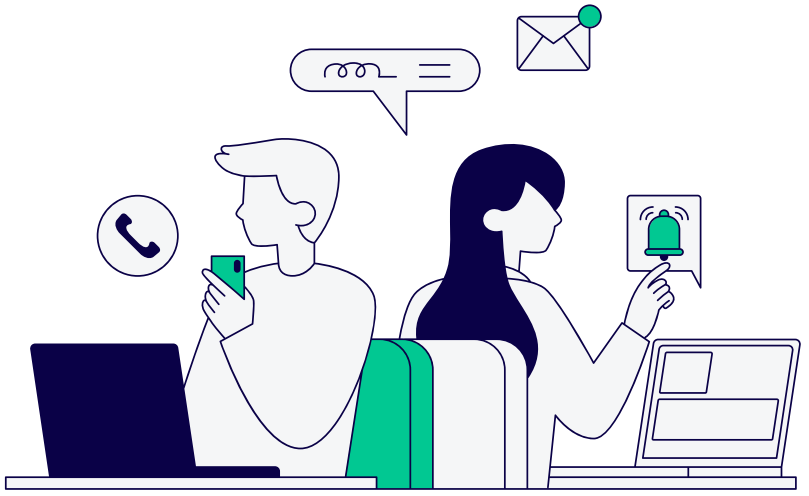
Cuadro N.º 14
Área de resoluciones
Motivo de exclusión "renuncia voluntaria"

Motivos de exclusión "renuncia voluntaria"	Cantidad
Decisión voluntaria de la persona protegida de no continuar ejecutando medidas de protección extraprocesales.	395
Retornó a la zona de peligro	96
No aceptó las nuevas medidas extraprocesales recomendadas	89
Incumplió las medidas de protección extraprocesales	46
Desistió de continuar con el proceso penal	27
Egresó de la alternativa de protección donde se encontraba	24
La persona salió del país.	16
Total	**693**

Fuente: Elaboración propia, datos del Área de Resoluciones, O.A.P.V.D. 2025

A partir de los datos expuestos en el cuadro anterior, se determinó que el 29% de los casos resueltos en esta área incluyeron la renuncia de la persona protegida, ya sea como única causal de exclusión o en combinación con otras causas. El motivo más recurrente, se refiere a la decisión voluntaria de las personas protegidas de no seguir implementando las medidas extraprocesales que se comprometieron a cumplir.

El mayor aprendizaje durante estos años, posterior a la entrada en vigor de la Ley N.°8720 es que la adherencia de las personas a un Programa de Protección en general, no sólo se logra otorgando medidas de seguridad, sino construyendo condiciones en las que la persona quiera permanecer, lo que implica pasar de un modelo centrado en el control y protección, a uno, centrado en la confianza, la autonomía y acompañamiento integral.



Capítulo V.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y USO DE RECURSOS

El disponer de un presupuesto o financiamiento público es clave para asegurar el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley N.º 8720, que busca proteger a las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, garantizando su seguridad, dignidad y participación efectiva en el sistema de justicia. Una gestión adecuada de los recursos permite implementar medidas de protección extraprocesales oportunas, fortalecer la coordinación interinstitucional y ejecutar acciones que favorezcan un abordaje integral de las víctimas. En este sentido, el presupuesto no solo constituye un elemento operativo, sino también una herramienta estratégica para materializar los principios de acceso a la justicia, equidad y atención diferenciada que promueve la normativa costarricense.

5.1 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El recurso económico para uso de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (O.A.P.V.D.), Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPROV) y Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en tema de víctimas y testigos (JEDO/O.A.P.V.D.-JEDO/UPROV) es aprobado por medio del programa presupuestario 950 denominado ***"Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos".***

Seguidamente, la tabla detalla la asignación de recursos para programa 950 y su nivel de ejecución respecto en los últimos 10 años:

Cuadro No. 15
Programa 950 "Servicio de Atención y Protección de Víctimas y testigos"
Histórico de Formulación y Ejecución Presupuestaria
2015-2025

Año	Monto Presupuestado	Monto Devengado	*Porcentaje de Ejecución
2015	8.675.400.000,00	6.791.754.871,28	81%
2016	9.037.468.651,00	8.224.613.478,04	91%
2017	9.299.970.400,00	8.325.643.760,04	92%
2018	9.798.119.000,00	8.550.638.451,76	93%
2019	9.758.489.752,00	9.183.624.566,27	95%
2020	9.750.429.416,00	9.202.879.114,47	94%
2021	9.288.786.790,00	8.848.262.565,31	95%
2022	9.615.646.300,00	9.080.916.912,11	94%
2023	11.752.584.636,00	10.074.155.734.26	86%
2024	11.032 698 747,40	10.645.172.073,58	96%
2025	11.083.176.185,00	10.164.841.481.27	92%

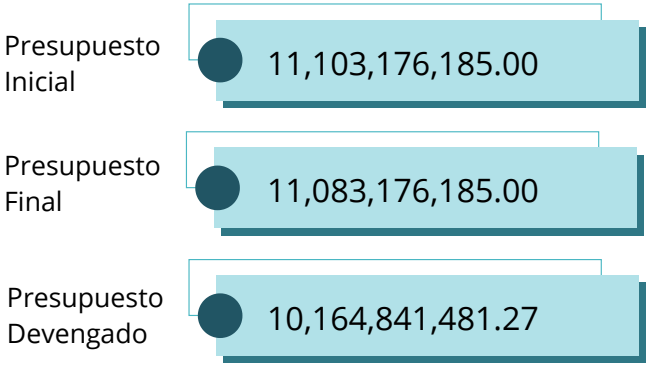
Fuente: Sistema SIGA PJ

5.1.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025

Para el 2025, el Programa Presupuestario 950 contó con un presupuesto de ¢11.083.176.185,00de los cuales se devengaron ¢10.164.841.481.27, lográndose así una ejecución de 92%.

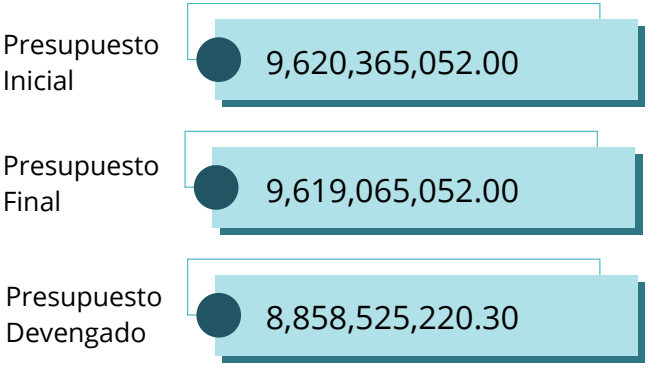
Seguidamente, se presenta cuadro con el dato de ejecución presupuestaria por partida:

PROGRAMA 950: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VICTIMAS-TESTIGOS



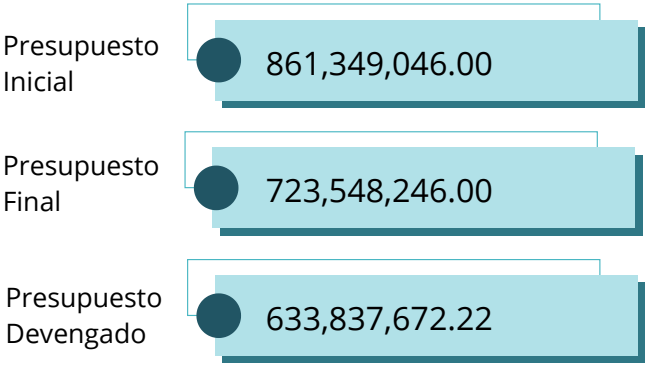
Nivel de Ejecución 92%

PARTIDA 0: REMUNERACIONES



Nivel de Ejecución 92%

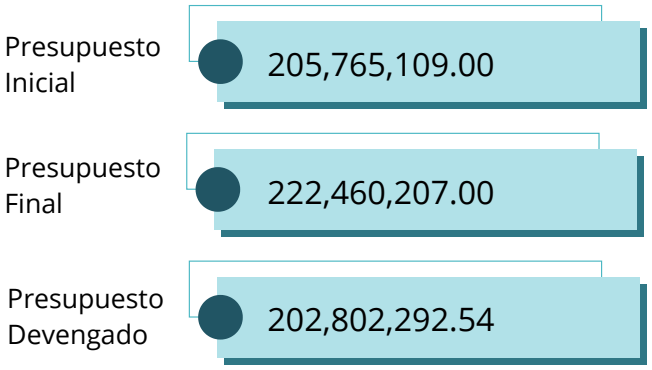
PARTIDA 1: SERVICIOS



Nivel de Ejecución 88%

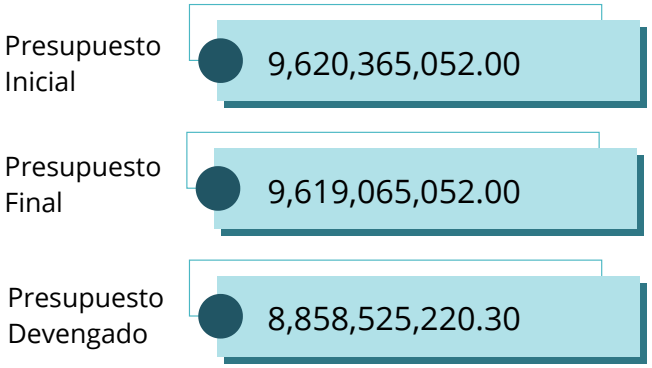
Fuente: Sistema SIGA PJ - Liquidación Presupuestaria

PARTIDA 2: MATERIALES Y SUMINISTROS



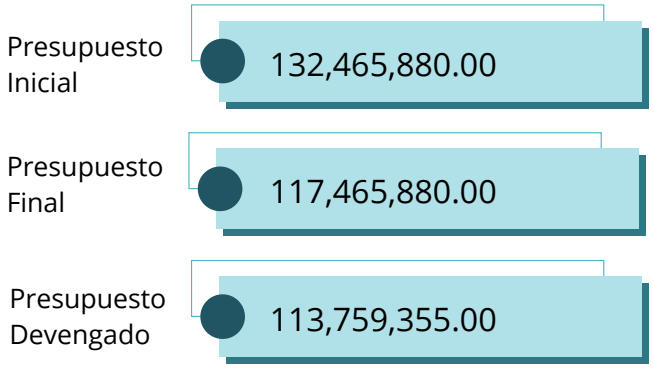
Nivel de Ejecución 91%

PARTIDA 6: TRANSFERENCIAS CORRIENTES



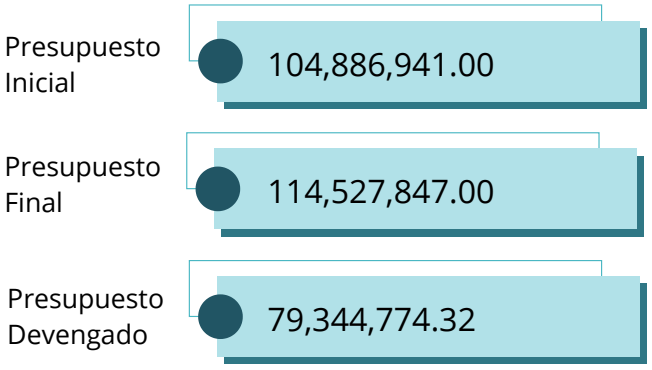
Nivel de Ejecución 92%

PARTIDA 7: CUENTAS ESPECIALES



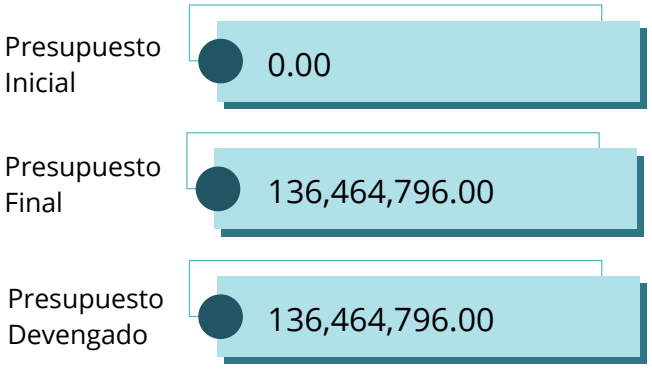
Nivel de Ejecución 97%

PARTIDA 5: BIENES DURADEROS



Nivel de Ejecución 69%

PARTIDA 7: TRANSFERENCIA DE CAPITAL



Nivel de Ejecución 100%

Fuente: Sistema SIGA PJ - Liquidación Presupuestaria

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025

La partida de remuneraciones devengó un monto de ¢8,858,525,220.30; es decir, un 92% del recurso asignado, esta partida presupuestaria contempla lo referente a sueldos fijos, disponibilidad laboral, décimo tercer mes, salario escolar, tiempo extraordinario; entre otros, para el personal que labora en la O.A.P.V.D., UPROV; además de la remuneración para el personal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en tema de víctimas y testigos (JEDO/O.A.P.V.D.-JEDO/UPROV). En el 2025, no fue posible concretar el 100% de los nombramientos para el puesto de Agentes de Protección, a pesar de los esfuerzos realizados desde la Dirección de Gestión Humana y el Organismo de Investigación Judicial.

En la partida de Servicios se devengaron ¢633,837,672.22; es decir un 88% del presupuesto asignado, dentro de los servicios que se gestionaron se encuentra el pago por servicios públicos, servicio de limpieza, seguridad y el pago del alquiler de locales. Dentro de los locales que la O.A.P.V.D. arrienda se encuentran: Corredores, Cartago, San Carlos, Goicoechea, San José; además contribuye con un pago porcentual en los inmuebles de PISAV Siquirres, Tres Ríos, San Joaquín y Pavas.

Adicionalmente, dicha partida permitió el pago de viáticos a funcionarios/as, ayudas económicas y costos de protección a víctimas, capacitación del personal; entre otros.

La partida de materiales y suministros logró un 91% de ejecución; a través de esta, se atendió el pago por combustible, mantenimiento de vehículos, aires acondicionados, de equipo de comunicación y tecnología. Además de la adquisición de colchones, sábanas, almohadas, artículos de cocina, alimentos para aquellas personas protegidas que carecen de recurso económico y fueron reubicadas para salvaguardar su vida e integridad física.

Por medio de la partida de bienes duraderos fue posible gestionar la compra de equipo tecnológico, mobiliario de oficina y electrodomésticos para préstamo a víctimas y testigos protegidos; no obstante, es importante aclarar que varias de las contrataciones que se gestionaron en el 2025, no lograron ingresar antes de que concluyera el cierre presupuestario del 2025, lo cual generó compromisos no devengados y, por ende, afectación a la ejecución del citado año.

En cuanto a la partida de transferencias corrientes, se alcanzó una ejecución de un 94%. Por su parte, la partida de transferencia de capital alcanzó el 100%.

Por parta de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del O.I.J., se utilizó la partida de Gastos Confidenciales que corresponde a la Partida denominada *“Cuentas Especiales”*, lo que permitió atender las necesidades operativas bajo las cuales, se brindaron los servicios a las personas en protección en el 2025, la ejecución fue del 97%.

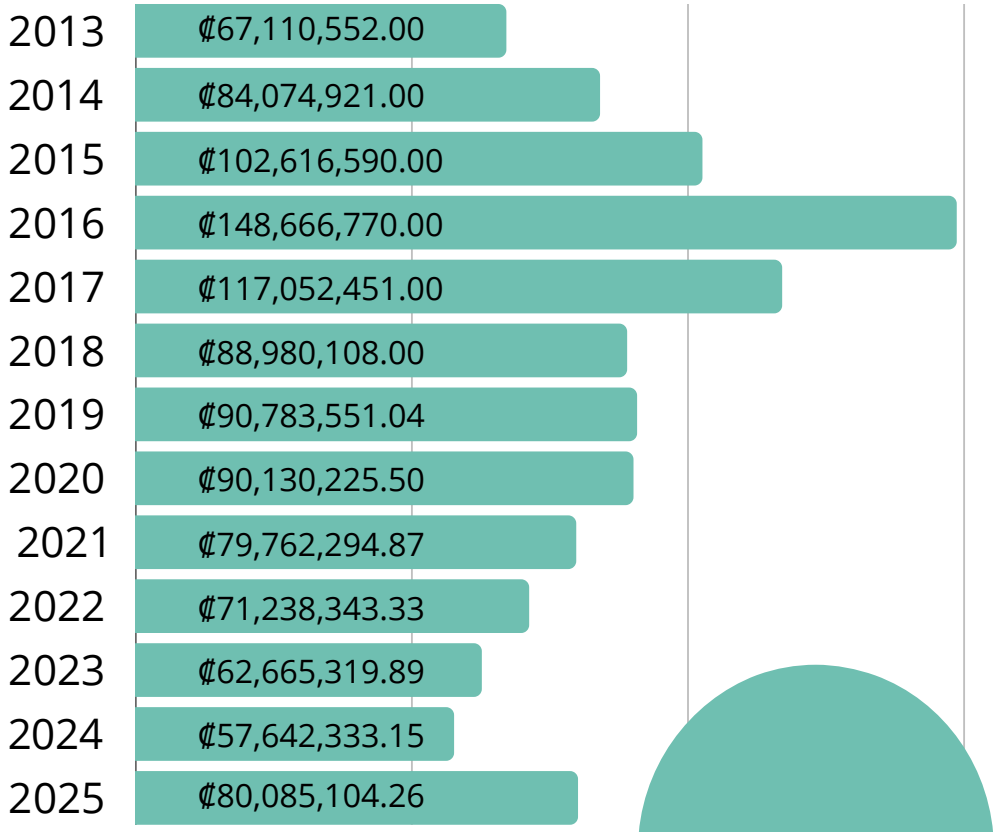
5.1.2 AYUDAS ECONÓMICAS Y COSTOS POR PROTECCIÓN

En el artículo 1 de la Legislación N.°8720, se define el objeto de la normativa, la cual consiste en: *"proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento"*, por otra parte, las reglas de Brasilia y Guías de Santiago señalan la importancia de la protección.

En virtud de lo antes expuesto, la O.A.P.V.D. incluye cada año dentro del presupuesto, el contenido económico para dar trámite a ayudas económicas y costos por protección, las cuales se brindan a las personas usuarias que carecen de recursos económicos para asistir a una audiencia, juicio, terapia, asesoría, e inclusive para la puesta en marcha de una medida de protección extraprocesal, como lo es, la reubicación para salvaguardar su vida e integridad física y la de su familia, se gestionan previo criterio profesional.

Seguidamente, se presenta el histórico de los últimos diez años, en pago de ayudas económicas y gastos de protección.

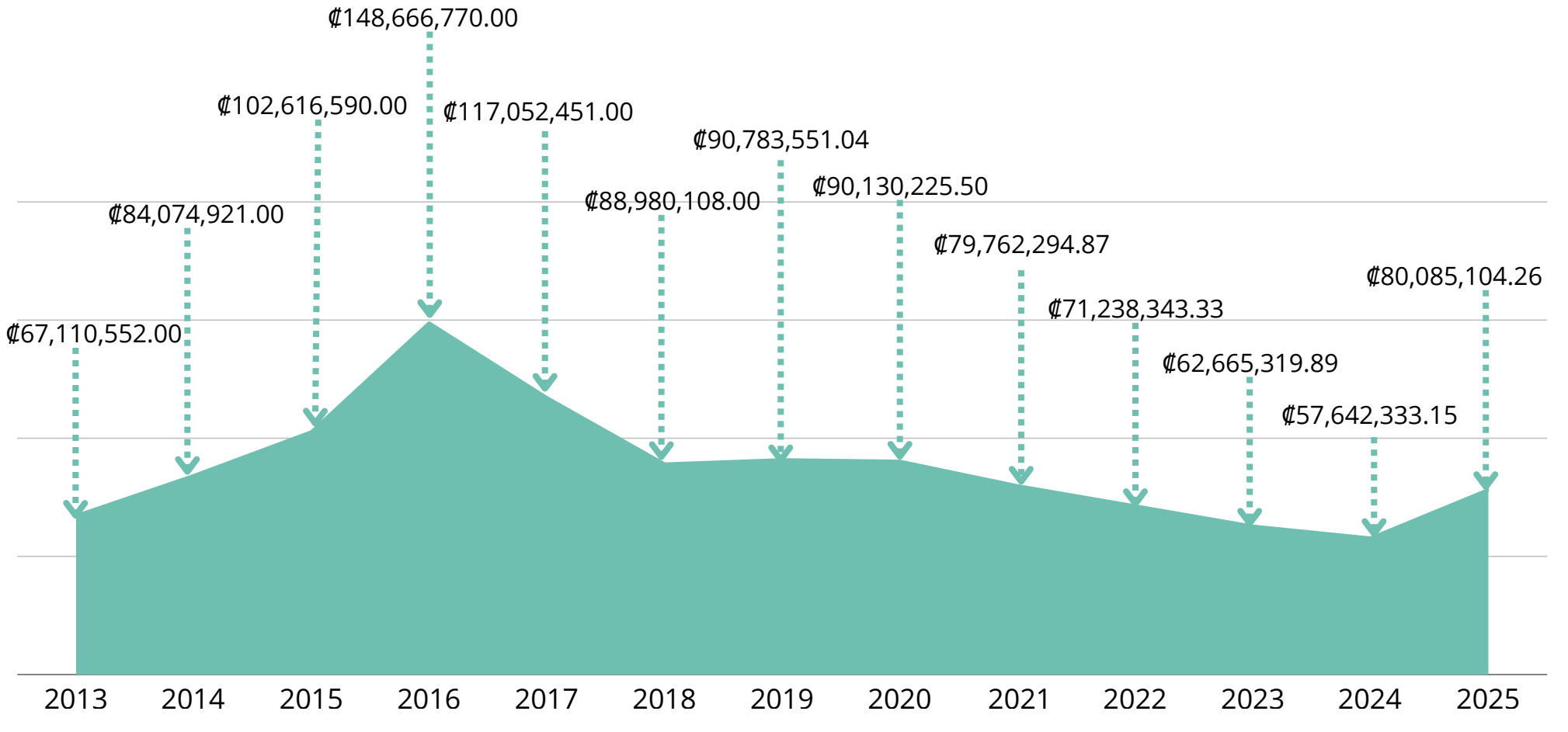
Cuadro No. 17
Histórico pago de ayudas económicas y costos por protección
Centro Gestor 718
2013- 2025



Fuente: Creación propia O.A.P.V.D.

A continuación, el consumo de ayudas económicas y costos por protección de los últimos diez años, pero gráficamente.

Gráfico No 15
Histórico pago de ayudas económicas y costos por protección
Centro Gestor 718
2013- 2025

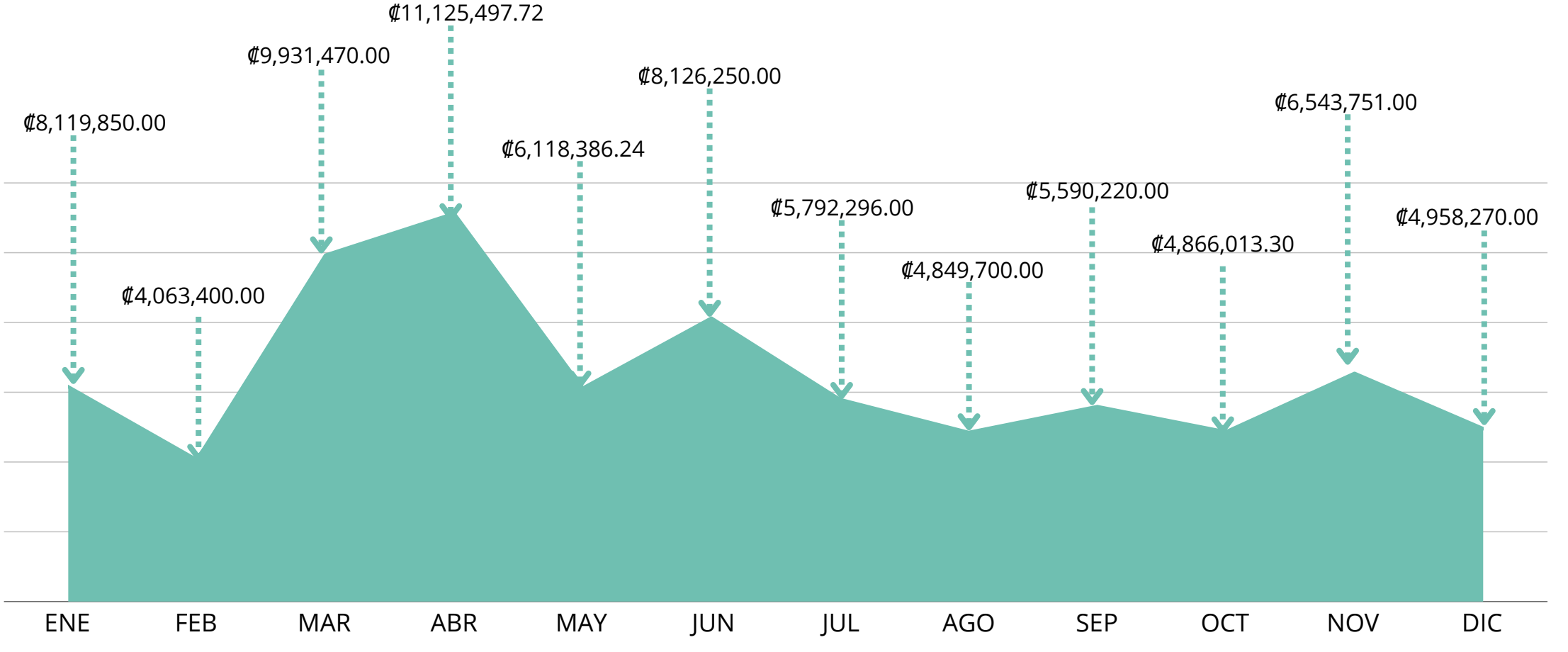


Fuente: Creación propia O.A.P.V.D.

A) DETALLE MENSUAL DE AYUDAS ECONÓMICAS Y COSTOS POR PROTECCIÓN

El siguiente gráfico muestra el consumo mensual respecto ayudas económicas y gastos de protección en cuanto al 2025, el mayor consumo se dio en marzo y abril.

Gráfico No. 16
Detalle de ayudas económicas y costos por protección por mes
Centro Gestor 718 y Oficina 1978
Año 2025



Fuente: Creación propia O.A.P.V.D.

B) DETALLE DE AYUDAS ECONÓMICAS Y COSTOS POR PROTECCIÓN POR SUBPARTIDAS

En la tabla del presente apartado, se resumen las sub partidas con mayor consumo económico en el 2025, en cuanto al pago de ayudas económicas y costos de protección, para la presentación de datos se han considerado las sub partidas con un gasto mayor a los ₡100.000,00; el mayor monto cancelado corresponde a la partida 10502 Viáticos dentro del país, la que permite cubrir el pago de desayuno, almuerzo, cena y hospedaje a las personas usuarias de escasos recursos, cuyas tarifas se rigen por el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la República y las directrices institucionales. También, mediante esta subpartida se formulan los recursos económicos que se brindan a las personas usuarias para atender el pago de arriendo de vivienda, esto aplica para los casos en que la medida extraprocesal recomendada para salvaguardar la vida e integridad física de la persona es la reubicación.

En la partida 2.03.03 de alimentos y bebidas, se tramita el pago de víveres para las personas de escasos recursos, personas víctimas y testigos que forman parte del programa de protección, y se les recomienda una medida extraprocesal para salvaguardar su vida e integridad física.

La subpartida 1.03.04 denominada transporte de bienes permite gestionar el pago de traslado de menaje de las personas que se reubican.



Por medio de la subpartida 2.99.05, se adquieren colchones, sábanas, cobijas y vestimenta para las personas que son reubicadas y no cuentan con los recursos económicos para adquirir este tipo de bienes.

La subpartida 2.01.02 permite adquirir productos farmacéuticos y medicinales, y la 2.99.99 materiales diversos.

Cuadro No. 18
Detalle de ayudas económicas y costos de protección
Centro Gestor 718 - Dato por subpartida
Año 2025

1.05.02	Viáticos dentro del país	₡ 53 ,795, 948.73
2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 12,765,721.24
1.03.04	Transporte de bienes	₡ 11,379,450.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 1,232,930.00
2.99.04	Textiles y vestuario	₡ 400,348.99
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡ 249,745.00
2.99.99	Otros útiles y materiales diversos	₡ 113,215.00
2.01.99	Otros productos Quimicos	₡ 78,860.00
2.99.02	Útiles, materiales, médicos, hospitalarios y de investigación	₡ 28,620.00
1.05.01	Transporte dentro del país	₡ 23,250.00
1.04.06	Servicios Generales	₡ 6,425.30
2.99.07	Útiles y materiales de cocina	₡ 5,600.00
2.99.03	Productos de cartón papel e impresos	₡ 2,790.00
2.01.03	Productos veterinarios	₡ 2,200.00

Fuente: Elaboración propia O.A.P.V.D.

C) DETALLE DE AYUDAS ECONÓMICAS Y COSTOS POR PROTECCIÓN POR SUBPARTIDAS

Finalmente, se han clasificado los costos por ayudas económicas y gastos de protección; según el delito que generó el ingreso al programa de atención o protección, en el siguiente cuadro, se describen los delitos con un gasto mayor a ₡500.000,00; siendo el mayor consumo por el delito de amenazas agravadas.

Cuadro No. 19
Consumo en ayudas económicas y costos por protección
Centro Gestor 718 - Clasificación por Delito
2025

Delito	Monto
Amenazas Agravadas	₡28 629 846,24
Maltrato	₡5 445 984,00
Agresión con Armas	₡5 413 331,34
Extorsión Cobratoria	₡4 561 000,00
Homicidio Calificado	₡3 641 180,00
Extorsión Simple	₡3 291 450,00
Incumplimiento una medida protección	₡3 288 910,00
Tentativa de Homicidio	₡3 110 639,73
Privación de Libertad sin Ánimo de Lucro	₡2 991 837,65
Homicidio Simple	₡2 695 900,00
Amenazas contra una Mujer	₡2 547 450,00
Amenazas	₡1 751 800,00
Privación de libertad	₡1 247 550,00
Homicidio	₡1 015 000,00
Accionamiento de Arma (Artículo 250 Bis)	₡960 000,00
Tentativa de Femicidio	₡815 300,00
Trata para otras formas de explotación laboral	₡742 870,00
Robo Agravado	₡727 900,00
Trata de personas con fines sexuales	₡606 075,30
Daños	₡586 800,00
Extorsión	₡577 000,00
Femicidio	₡498 150,00
Tráfico ilícito de personas (Art 249 Bis)	₡493 300,00
Violación	₡468 100,00
Amenazas y daños	₡446 800,00
Violación de Domicilio	₡400 000,00
Amenazas con Arma	₡389 100,00
Averiguar desaparición	₡381 600,00
Amenazas y Lesiones	₡327 300,00
Violación de Comunicaciones Electrónicas (Artículo 196 Bis)	₡313 000,00
Violación contra una mujer	₡222 940,00
Abusos Sexuales Personas Menores Edad e Incapaces	₡188 800,00
Persecución o acorralamiento	₡180 000,00
Coacción	₡170 000,00
Incumplimiento o Abuso Patria Potestad	₡170 000,00
Ofensas a la Dignidad.	₡137 200,00
Incendio o Explosión	₡127 400,00
Amenazas Personales	₡85 000,00
Maltrato, amenazas y lesiones	₡75 000,00
Robo Simple	₡70 000,00
Privación de Libertad sin Ánimo de Lucro	₡60 000,00
Secuestro Extorsivo	₡58 090,00
Agresión Física	₡50 000,00
Trata para otras formas de explotación sexual y laboral	₡41 300,00
Desobediencia	₡40 000,00
Almacenamiento de drogas	₡37 600,00
Daño Patrimonial	₡4 000,00
Violencia	₡2 600,00
TOTAL	**₡80 085 104,26**

Fuente: Elaboración propia O.A.P.V.D.

Capítulo VI.

LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA O.A.P.V.D.

OAPVD

En este capítulo se describirá un recuento de las actividades formativas recibidas por el Talento Humano de esta Oficina y aquellas en las que personas profesionales han participado como facilitadoras de otros procesos o actividades que proyectan la labor de esta dependencia.

6.1 LA SENSIBILIZACIÓN EN LA ATENCIÓN Y ABORDAJE A VÍCTIMAS DEL DELITO.

Los procesos de sensibilización a las personas víctimas del delito que, día con día se materializa en los distintos contextos en los que opera la O.A.P.V.D., constituye un pilar fundamental en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema de justicia en Costa Rica. Estas acciones no solo buscan informar a las personas afectadas por delitos, sino también transformar la manera en que las instituciones y la sociedad comprenden sus diversas circunstancias.

En primer lugar, la sensibilización permite que las víctimas reconozcan sus derechos y se empoderen frente a su situación. Muchas personas desconocen que tienen derecho a recibir información clara, acompañamiento emocional y medidas de protección. A través de campañas educativas y orientación directa, nuestras sedes contribuyen a reducir la desinformación y a fomentar la confianza en la administración de justicia, lo cual es esencial para que las víctimas se motiven a denunciar y participen en el proceso penal.

Asimismo, estas acciones ayudan a disminuir la revictimización, un problema recurrente en los procesos judiciales. Del mismo modo, las actividades formativas y la adoptación de buenas prácticas de autocuidado dirigida a funcionarios públicos promueven un trato más humano, empático y respetuoso, evitando que las víctimas sufran daños adicionales al interactuar con instituciones como la policía, los tribunales y las oficinas del Ministerio Público. Esto resulta especialmente relevante en casos de violencia doméstica, abuso sexual y delitos contra poblaciones vulnerabilizadas.

6.2 FORMACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE NUEVO INGRESO.

En el marco de las acciones estratégicas impulsadas desde el Área de Proyectos, se llevó a cabo un proceso sistemático de fortalecimiento de la inducción para el personal que se incorpora a la O.A.P.V.D.

Durante el año 2025, se ejecutaron tres procesos de inducción desarrollados en los meses de febrero, mayo y agosto, con una duración de 9 días cada uno. En total participaron 25 personas, de las cuales 24 aprobaron satisfactoriamente el proceso, lo que representa una tasa de aprobación del 96% y evidencia la solidez metodológica del proceso y el nivel de compromiso del personal participante.

Como resultado del trabajo de fortalecimiento, se desarrollaron tres instrumentos de inducción diferenciados; según el perfil de la persona destinataria. La Guía de Inducción para Personal de Nuevo Ingreso y la Guía para Personas Facilitadoras del Proceso de Inducción alcanzaron un avance del 80%, mientras que la Propuesta de Taller para Personal por Inopia registró un avance del 20%.

Los contenidos que se desarrollan durante cada inducción abarcan los aspectos sustantivos de la operatividad y el funcionamiento de los Programas de Protección y Atención; tales como: los modelos de abordaje, la valoración de situación de riesgo, las medidas de protección extraprocesales, los informes técnicos, las labores coordinadas con la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPROV), las áreas administrativas de pagos, compras, talento humano, vehículos, y el tema de gestión de continuidad del servicio. Se implementaron estrategias metodológicas, ejercicios prácticos y orientaciones para la transmisión efectiva del conocimiento, con énfasis en una atención sensibilizada, ética y técnica.

En paralelo, se reforzó el proceso de evaluación al personal en inducción. Se diseñaron y formalizaron tres herramientas: un Protocolo para el Tribunal Evaluador, que establece los pasos, responsabilidades y tiempos del proceso de evaluación final; una Rúbrica de Evaluación que pondera competencias teórico-metodológicas, habilidades blandas durante la presentación; así como puntualidad y participación a lo largo del proceso. Adicionalmente, un acta de deliberación, instrumento oficial mediante el cual, el Tribunal Evaluador documenta las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en cada persona postulante.

En conjunto, estas acciones sientan las bases para un proceso de inducción ordenado, estandarizado y medible, que garantiza la transmisión oportuna del conocimiento, reduce el margen de error en la incorporación del nuevo personal y contribuye a la mejora sostenida de los servicios que se suministran a las personas usuarias.

6.3 LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE PROYECCIÓN EN LA O.A.P.V.D.

Esta Oficina reafirma, año con año, su compromiso con el servicio público, manteniendo en sus prioridades la evolución del conocimiento que sustenta el desarrollo efectivo de sus funciones. De esta manera, se insta e impulsa la constante actualización de las servidoras y los servidores judiciales en las diferentes materias aplicables de manera general y también en temas específicos atinentes a cada disciplina.

Por otra parte, también resulta importante el fortalecimiento de las poblaciones por medio de acciones compartidas que llevan a un mayor conocimiento del objetivo de la Ley N.°8720.

6.3.1 LAS ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDAS. UNA INVERSIÓN PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO PÚBLICO BRINDADO.

En el 2025, el capital humano de este despacho continuó participando en actividades de capacitación y formación para fortalecer sus conocimientos y habilidades. Esto, les permite mejorar la atención y los servicios que se brindan a las personas usuarias. Como parte de los procesos de mejora continua, se llevó un registro de las diferentes actividades formativas en las que participaron.



Cuadro No. 19
Consumo en ayudas económicas y costos por protección
Centro Gestor 718 - Clasificación por Delito
2025

CANTIDAD	CATEGORÍA	CANTIDAD DE HORAS	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
105	CURSO	579	285
28	CAPACITACIÓN	371	196
41	CHARLA	111	264
1	CONGRESO	28	3
4	ENCUENTRO	25.5	13
3	SESIÓN TÉCNICA	15	8
4	TALLER	14.5	4
3	CONFERENCIA	10	17
1	JORNADA EDUCATIVA	8	1
2	INDUCCIÓN	6	2
2	WEBINAR	4.5	7
194	TOTAL	1172.5	800

Fuente: Elaboración propia O.A.P.V.D.

Toda participación implica una coordinación interna a nivel de equipos, de manera que el aprendizaje se mantenga mientras se continúa brindando el servicio público de calidad, adicionando a esto, que la participación se regule para todas las personas servidoras de esta Oficina en las diferentes disciplinas y para el personal de apoyo.

Las actividades tienen diferentes orígenes, por cuanto se aprovecha al máximo la oferta institucional brindada por las Unidades de Capacitación institucionales, también se toman en cuenta las invitaciones que ingresan desde otras instituciones interesadas en la participación del personal y de otras acciones formativas que requirieron de un mayor esfuerzo porque se formalizaron por medio de la contratación pública.

Se enfatizó en la importancia a la política institucional de seguridad de la información de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC), con quien se coordinó una actividad, esto; con el fin de tener presente la responsabilidad de los registros institucionales. También se registró un número significativo de participaciones en charlas relacionadas a habilidades blandas como técnicas de comunicación efectiva, autocontrol y asertividad. Aunado a ello, se brindó seguimiento al cumplimiento del personal en el curso de ética y transparencia impartido por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público.

Entre las actividades contratadas se realizó una denominada *"Taller denominado Bases técnicas de redacción y ortografía para la elaboración de informes técnicos jurídicos dentro del Marco Legal de la O.A.P.V.D."*. En total 15 personas profesionales, en su mayoría de la disciplina legal tuvieron la oportunidad de actualizarse en materia de redacción técnica.

6.1.3 ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS MEDIANTE EL ENFOQUE DE COMPARTIR EL CONOCIMIENTO.

Para completar el importante servicio que desempeña esta dependencia se lleva también el detalle de aquellas actividades donde el personal mismo, se convierte en ponente como un recurso portador de formación para diferentes tipos de población.

Más de 3027 personas se beneficiaron de las actividades que las y los profesionales de esta Oficina compartieron, tomando en cuenta que algunas de las participaciones en estas actividades no son posibles de cuantificar debido a que el alcance a la población es un número indefinido. Algunos de los sitios visitados incluyen centros educativos como Escuela La Isla, Escuela Dulce Nombre de Coronado, Escuela la Lía, Colegio de Cahuita, Escuela de Chinakicha, Escuela de la Sabana en Térraba, Colegio de Maryland Siquirres y Escuela La Carpio; también grupos de mujeres como la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia de Género de Santa Bárbara de Heredia, Grupo Formación Humana de INAMU, VIF Red de Violencia Intrafamiliar de Talamanca, Grupo comunitario Isla Venado, Grupo de víctimas de violencia doméstica de OFIM; entre otros.

Durante el 2025, garantizar el acceso de la información a la ciudadanía continuó siendo una de las principales tareas institucionales. A través de charlas y espacios de divulgación, se dieron a conocer los servicios de la Oficina y los derechos contemplados en la Ley N° 8720. Estas actividades permitieron informar y orientar cerca de 2.311 personas.
Otras de las temáticas que se abordaron en estas diferentes charlas fueron las siguientes:

- Análisis de riesgo y estudio de seguridad.
- Violencia contra la mujer, empoderamiento de los servicios.
- Charla de Autoprotección.
- Ruta de interposición de denuncia y casos CLAIS.
- Temas de Seguridad Personal.
- Relaciones impropias.
- Masculinidades.
- Tipos de violencia en la adultez mayor y derechos de la población.
- Trata de Personas.
- Violencia doméstica.
- Ciclo de violencia y servicios que se brindan.,
- Curso sobre abordaje de delitos contra la vida con perspectiva victimológica.
- Masculinidades Saludables y Promoción de los servicios.
- Mitos del amor romántico.

Capítulo VII.

INNOVACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA

La innovación y la mejora continua son pilares fundamentales para que esta Oficina responda de manera eficaz a las necesidades cambiantes de las personas que han sido víctimas de un delito o figuran como testigos en alguna investigación judicial. A través de la incorporación de nuevas metodologías, tecnologías y enfoques interdisciplinarios, se pueden optimizar los procesos de atención, reducir tiempos de respuesta y brindar un acompañamiento más humano, accesible y centrado en las personas usuarias.

Asimismo, la mejora continua permite evaluar de manera constante los servicios ofrecidos, identificar brechas y ajustar las estrategias para garantizar una atención integral y digna. Mediante la capacitación permanente del personal, la recopilación de retroalimentación de las personas usuarias y la adopción de buenas prácticas; la oficina puede adaptarse a nuevos contextos sociales, jurídicos y tecnológicos. Este enfoque dinámico asegura que la atención no sea estática, sino evolutiva, reafirmando el compromiso institucional con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del acceso a la justicia.

Durante el 2025 este despacho emprendió y consolidó con la labor a cargo del Área de Proyectos, el planteamiento y ejecución de diversas iniciativas u otras acciones tendientes a garantizar la mejora continua, la implementación de nuevos procesos y la optimización de la tecnología.

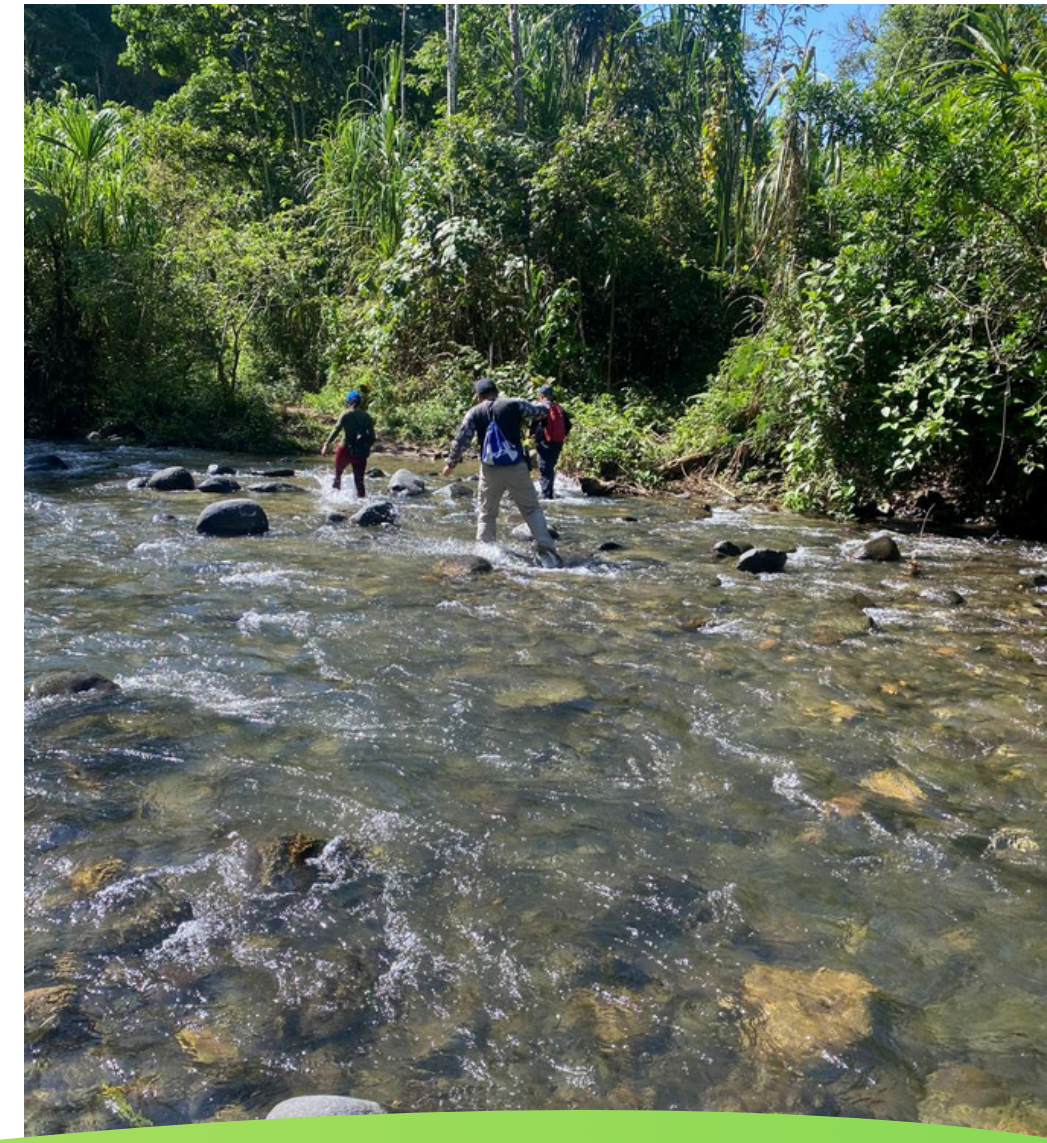
Asimismo, estas acciones ayudan a disminuir la revictimización, un problema recurrente en los procesos judiciales. Del mismo modo, las actividades formativas y la adopción de buenas prácticas de autocuidado dirigida a funcionarios públicos promueven un trato más humano, empático y respetuoso, evitando que las víctimas sufran daños adicionales al interactuar con instituciones como la policía, los tribunales y las oficinas del Ministerio Público. Esto resulta especialmente relevante en casos de violencia doméstica, abuso sexual y delitos contra poblaciones vulnerabilizadas.

7.1 INICIATIVAS BAJO LA MODALIDAD DE LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS



7.1.1. PROYECTO DE REGLAMENTO EJECUTIVA A LA LEY N° 8720

Durante el año 2025, después de diversos trámites, coordinaciones y gestiones de seguimiento realizadas ante el Ministerio de Justicia y Paz, la Secretaría General de la Corte y la Corte Plena, se logró encauzar formalmente el proyecto del Reglamento Ejecutivo de la Ley N.º 8720 ante la instancia competente. En ese proceso, se recuperaron y remitieron nuevamente los insumos requeridos, se dio seguimiento al análisis jurídico del Ministerio de Justicia y Paz; posteriormente, se atendieron las observaciones formuladas por dicho Ministerio y finalmente, se remitió a la Corte Plena, la versión ajustada del proyecto. Al cierre del 2025, el Reglamento Ejecutivo se encontraba formalmente en poder de la Corte Plena, pendiente únicamente de ser conocido y resuelto conforme al orden de agenda.



Este reglamento resulta crucial porque tiene como finalidad regular la aplicación de la Ley N.º 8720, denominada *"Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código Penal".*

Su aprobación permitirá dotar de mayor claridad, uniformidad y dirección a los procedimientos, favoreciendo una respuesta más coordinada, oportuna y efectiva en la protección de las personas intervinientes en los procesos penales.

7.1.2. EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA LEY 8720.



Este proyecto tiene como propósito fortalecer el servicio brindado por el área legal, mediante la realización de seguimientos legales a los procesos penales y asesorías jurídicas; con el fin de garantizar la debida asistencia, protección y acceso a la justicia de las personas intervinientes en dichos procesos que reciben atención por parte de esta Oficina.

Durante el año 2025, se realizaron 10.476 seguimientos a procesos penales y 6.296 asesorías legales a personas usuarias. De estas últimas, 4.549 se brindaron vía telefónica, modalidad que favorece una mayor accesibilidad al servicio, al evitar desplazamientos innecesarios. Este mecanismo resulta valioso para personas que residen en zonas alejadas, enfrentan limitaciones por razones laborales o familiares, o quienes presentan dificultades de movilidad.

Como aporte adicional del equipo del proyecto, se concretaron 2.170 diligencias, correspondientes a monitoreos telefónicos a personas protegidas, acompañamientos a juicio, cierres de expedientes, entrevistas iniciales, entrevistas de valoración y revaloración de situación de riesgo; entre otras actuaciones propias del servicio.

7.1.3. PROYECTO DE REFORMULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE ABORDAJE PARA LA INTERVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL.

El proyecto inició debido a la urgente necesidad de mejorar los recursos para el desempeño de las labores de los equipos de trabajo a nivel nacional. Frente al avance de la delincuencia, que refina continuamente sus estrategias, nuestra Oficina debe responder de manera equivalente para optimizar el servicio público ofrecido a las personas usuarias.



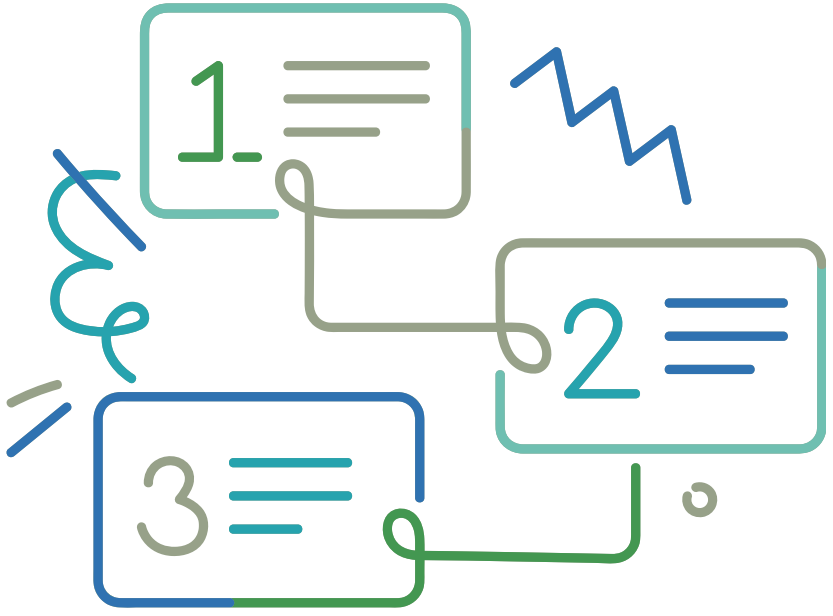
Esta iniciativa es crucial, ya que permitirá la reformulación de herramientas esenciales que guiarán al personal sobre procedimientos y estrategias actualizados para intervenir, atender y proteger a los (as) usuarios (as) de nuestros programas. Se aplicarán criterios más rigurosos para manejar la creciente complejidad de los casos. Además, el proyecto contempla capacitaciones sobre estas actualizaciones para asegurar un enfoque más efectivo en el manejo de los casos.

Se avanzó significativamente, por lo que destacan los porcentajes de avances obtenidos. El Protocolo de Atención alcanzó un nivel de avance del 90 %, el Manual de Procedimientos de Atención un 85 %, el Protocolo de Protección un 75 % y el Manual de Procedimientos de Protección un 75 %.

7.2. PROTOCOLOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS O FORTALECIMIENTO DE OTROS.

7.2.1 PROTOCOLOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS O FORTALECIMIENTO DE OTROS.

El Protocolo ESI/ACI permitió estandarizar los estudios de seguridad de inmuebles y el análisis criminológico de infraestructuras, fortaleciendo la rigurosidad técnica en la ejecución de medidas de protección extraprocesales, particularmente en casos de reubicación. El Estudio de Seguridad de Inmuebles contempla aspectos de seguridad perimetral, estructural, electrónica, del entorno y otros elementos relevantes; mientras que el Análisis Criminológico de Infraestructuras es un instrumento novedoso más flexible que también permite evidenciar fortalezas y debilidades en materia de seguridad estructural. Este procedimiento también favoreció una participación más protagónica de las personas profesionales en trabajo social y criminología, con el fin de garantizar reubicaciones exitosas.



El nuevo protocolo fue comunicado mediante el Memorándum 12-O.A.P.V.D.-2025 de fecha 25 de agosto de 2025.

7.2.2 PROTOCOLO PARA LA SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SITIOS SEGUROS DE HOSPEDAJE TEMPORAL UTILIZADOS POR LA O.A.P.V.D.

El Protocolo para la selección y clasificación de sitios seguros de hospedaje temporal utilizados por la O.A.P.V.D. constituyó una herramienta relevante para ordenar y estandarizar el procedimiento de valoración de alternativas de hospedaje temporal. A través del estudio de seguridad correspondiente, se buscó asociar la clasificación de seguridad de los sitios con el nivel de riesgo determinado. Esta clasificación, organizada en categorías AAA, AA, A y B, permite contar con criterios más objetivos para la selección de recursos de hospedaje, fortaleciendo la calidad y seguridad de las medidas adoptadas. A finales de 2025, se inició un plan piloto orientado a validar la ejecución de este nuevo procedimiento en un ambiente controlado, de previo a su implementación a nivel nacional.



7.2.3 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

Se desarrolló el Protocolo para la atención de víctimas de trata de personas, el cual alcanzó un nivel de avance del 85 %. Este instrumento constituye un insumo técnico de especial relevancia, y la necesidad de contar con lineamientos especializados que orienten la intervención institucional desde un enfoque integral, sensible y ajustado a las particularidades de esta tipología delictiva.

7.2.4 PROTOCOLO PERSONA ATACANTE ACTIVO Y GUÍA DE AUTOPROTECCIÓN PARA PERSONAS FUNCIONARIAS DEL PODER JUDICIAL.

Durante este año, se desarrolló una labor de divulgación del protocolo denominado *"Persona Atacante Activo"*, dirigido a toda la población judicial, con el propósito de brindar información relevante y orientar al personal sobre los pasos básicos para identificar, prevenir y mitigar una eventual situación de amenaza o crisis de esta naturaleza, ante la posible presencia de una persona atacante activa en cualquier sede del Poder Judicial de Costa Rica. Asimismo, se divulgó la Guía de autoprotección para personas funcionarias del Poder Judicial, la cual instruye sobre acciones aplicables tanto en el ejercicio de las funciones judiciales como en la vida personal.

Para tales efectos, se realizaron 48 charlas presenciales en distintos circuitos judiciales del país, mediante las cuales, se capacitó a un total de 1.956 personas.



7.3 OTRAS ACCIONES RELEVANTES.

7.3.1 LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE DATOS UNAD

El inicio de la Unidad de Análisis de Datos de la O.A.P.V.D. representó un avance relevante en la consolidación de información estratégica para la toma de decisiones. Entre sus principales avances y logros, se destaca la creación de una base de datos nacional, la centralización y el acceso inmediato a la información; así como la posibilidad de analizar la procedencia de los casos por provincia, cantón y distrito. Asimismo, permitió identificar zonas de alta y baja incidencia, delitos por oficina, casos por día de la semana, datos útiles para reubicaciones y posibles vínculos con organizaciones criminales. De la mano con lo anterior, también se fortaleció la relación con el Sistema de Emergencias 9-1-1; a fin de contar con mayor diversidad y cantidad de datos que permitirán a los Equipos Técnicos Evaluadores de todo el país, elaborar planes de protección con más información a su disposición.

7.3.2 GESTIONES EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO LABORAL Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

Se impulsaron diversas gestiones vinculadas al reconocimiento de condiciones laborales y a la organización del servicio. Entre estas, se incluyen la gestión para el pago del rubro salarial por riesgo, el reconocimiento del sobresueldo por coordinación, la gestión para el pago de horas extra por continuidad laboral y el impulso del turno vespertino. Estas acciones procuran fortalecer las condiciones institucionales necesarias para responder adecuadamente a las demandas del servicio y garantizar su continuidad operativa.



7.3.3 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

La gestión de la continuidad del servicio es un tema crucial para esta dependencia ya que constituye el pilar de las herramientas mínimas necesarias que permitirán mantener el servicio, en caso de que ocurra un evento disruptivo. Por lo expuesto, se mantiene coordinación estrecha y se cuenta con el apoyo del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio del Poder Judicial.
En el marco del seguimiento a la implementación de la Gestión de la Continuidad del Servicio, la Oficina recibió un reconocimiento destacado por parte del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio del Poder Judicial. Mediante oficio N.°19-DE-SGCS-2025, suscrito por el señor Melvin Obando Villalobos, jefe de dicho Subproceso, se comunicó que esta instancia fue identificada como la única oficina clasificada en condición de *"Sobresaliente"*. Asimismo, se destacó que la Oficina se mantiene como la más sobresaliente en su compromiso con la gestión de la continuidad del servicio y como la que presenta mayor avance en la incorporación del pensamiento basado en riesgos de continuidad.

Otras de las acciones realizadas fue la colaboración al Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio del Poder Judicial, en la ejecución de pruebas de funcionalidad de los sistemas críticos institucionales, en el marco de los trabajos programados a nivel de la plataforma tecnológica.

Adicionalmente, se mantiene vigente el formulario de autoevaluación para que cada equipo de trabajo a nivel nacional, de manera voluntaria logre identificar su nivel de cumplimiento, en cuanto a la gestión de la continuidad del servicio.

7.3.4 COLABORACIONES A OTRAS INSTANCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Se brindó colaboración a la fiscalía general de la República, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género y la Unidad de Capacitación en la dirección de iniciativas de interés institucional. Entre estas se encuentran el Modelo de Justicia Abierta para el Ministerio Público, la sistematización de circulares institucionales, la Comisión de Cero Papel del Ministerio Público y la Guía de abordaje de femicidios. Estas colaboraciones reflejan la capacidad técnica del área para aportar en procesos estratégicos más allá de su ámbito inmediato de gestión.

El trabajo desarrollado por el Área de Proyectos evidencia un compromiso sostenido con la excelencia, la mejora continua y la transformación de ideas en soluciones concretas. Las acciones impulsadas durante el periodo informado reflejan una gestión orientada al fortalecimiento técnico, la estandarización de procesos, la innovación metodológica y la generación de herramientas útiles para mejorar la calidad del servicio que se brinda a nivel nacional.



7.3.5 LABORES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA MODALIDAD PISAV

La Coordinación Técnica, la Administración del Modelo PISAV y su Equipo Gerencial, integrado por jefaturas de las distintas oficinas que operan en las plataformas, mantienen un seguimiento continuo del funcionamiento del modelo en los lugares donde operan (Pavas, La Unión, San Joaquín de Flores y Siquirres), con el propósito de mejorar la atención y los servicios que se brindan a las personas usuarias.

Durante el año 2025, se realizaron cuatro reuniones de trabajo (14 de enero, 3 de abril, 7 de mayo y 23 de julio), tres en modalidad virtual y una presencial en la sede de La Unión. En estos espacios se revisaron aspectos clave del funcionamiento diario, se identificaron necesidades y se definieron acciones de mejora en temas como seguridad, tecnología e infraestructura. Estas acciones se encuentran actualmente en proceso de atención en coordinación con las áreas responsables. Además, se desarrollaron acciones informativas para dar a conocer a la población los servicios que ofrece el modelo PISAV. Esto incluyó la publicación de cápsulas informativas en sitios web especializados y mediante canales institucionales de comunicación.

Ante la entrada en vigor de la Reforma del Código Procesal de Familia, se han realizado consultas técnicas a la Dirección de Planificación para analizar posibles ajustes en el funcionamiento del modelo, garantizando así que los servicios se mantengan actualizados y respondan a los cambios normativos.

Por otra parte, la Contraloría de Servicios evaluó la atención brindada por el modelo PISAV. Los resultados reflejan, en su mayoría, un desempeño satisfactorio y oportunidades de mejora que ya están siendo atendidas.

En materia de infraestructura, se contempló el traslado de una de las sedes del PISAV a un nuevo espacio con mejores condiciones de seguridad y acceso para las personas usuarias. No obstante; debido a las limitaciones presupuestarias, este proyecto se encuentra temporalmente suspendido, mientras se realizan los estudios necesarios para su eventual ejecución.



7.3.6 PROGRAMA MUJER DIGITAL Y MUJERES EMPRENDEDORAS DE JUNIOR ACHIEVEMENT COSTA RICA.

Esta organización forma parte de una de las organizaciones no gubernamentales más grandes a nivel mundial dedicadas al servicio de los jóvenes. Entre los programas que ofrece se destaca *"Mujer Digital"*, que corresponde a una iniciativa regional de alto impacto diseñada para capacitar y aumentar la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad en el campo de la economía digital. Este programa tiene como objetivo reducir la desigualdad de género y promover la empleabilidad juvenil femenina en la industria tecnológica, ofreciendo formación técnica en áreas como Desarrollo Web, Computación en la Nube y Ciberseguridad. En el año 2025, se refirieron un total de 15 mujeres usuarias de esta oficina al citado programa.

Además, se refirieron un total de 77 mujeres usuarias para el Programa de Mujeres Emprendedoras, cuyo objetivo principal es fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral al empoderar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, alentándolas a convertirse en agentes de cambio económico. Asimismo, busca promover una visión positiva sobre su integración al mercado laboral y fomentar su desarrollo como emprendedoras y líderes de alto impacto en sus comunidades. El programa abarca temas relacionados con desarrollo personal, de negocio, finanzas y sostenibilidad del negocio y marketing digital.

7.3.7 OTRAS ACCIONES DE MEJORA TÉCNICA.

Se materializaron avances relacionados con diversas acciones orientadas a mejorar la gestión técnica y administrativa de este despacho, entre estas, la gestión ante el Consejo Superior sobre ayudas económicas para generar la debida regulación de los costos de atención y protección, el estudio de rangos de costos de sitios seguros de hospedaje temporal y la elaboración de la Guía de Transportistas. Además, se avanzó en valoraciones de situación de riesgo, conforme al artículo 14 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la O.A.P.V.D. y a las Guías de Santiago; así como en la actualización de instrumentos del Escritorio Virtual y en el fortalecimiento de la confidencialidad documental.



Capítulo VIII.

RETOS Y DESAFÍOS

A más de diecisiete años de la entrada en vigor de la Ley N.º 8720, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público de Costa Rica se enfrenta a un escenario profundamente distinto al que motivó su creación. El notable incremento de la violencia y la criminalidad acentuada en los últimos años, especialmente vinculada al narcotráfico y crimen organizado; además del aumento de casos relacionados con la violencia de género especialmente los femicidios, ha generado una presión creciente sobre los servicios institucionales dirigidos a las víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal. Esta nueva realidad ha implicado no solo un aumento en la cantidad de personas que requieren los servicios de la O.A.P.V.D., sino también una mayor complejidad en los casos, caracterizados por altos niveles de riesgo, trauma y vulnerabilidad, lo que compromete la capacidad de respuesta oportuna y especializada de este despacho.

La O.A.P.V.D. enfrenta algunas veces condiciones adversas que impactan la carga laboral, el seguimiento integral de los casos y la cobertura real de los servicios, pese al enfoque humanista que promueve la normativa vigente. A ello, se suma la necesidad de fortalecer y consolidar la cobertura territorial para ser efectivo el derecho de acceso a la justicia; así como, la protección efectiva, lugares como Turrialba, Grecia, Buenos Aires y Nicoya, operan con solo una persona profesional y pese a que se procura una metodología de trabajo para brindar los servicios interdisciplinarios, existen algunas condiciones adversas relacionadas con la logística, saturación de agendas y hacinamiento en los tribunales donde se brindará el servicio; entre otros.

Adicionalmente, se destaca la necesidad de la apertura de una oficina unipersonal en Quepos adscrita a la sede de Puntarenas, considerándose una prioridad por las dificultades que se presentan en el traslado desde el cantón central de Puntarenas; tomando en consideración que el Circuito Judicial de Aguirre-Parrita tiene representación de todos los despachos jurisdiccionales, auxiliares de justicia y dependencias administrativas.

La articulación interinstitucional representa un aspecto clave para garantizar una atención equitativa y efectiva en todo el país, especialmente en zonas con menor presencia de instituciones públicas y mayores índices de violencia.

El escenario actual pone en evidencia la urgencia de revisar y actualizar los marcos normativos e institucionales que sustentan la atención a víctimas en Costa Rica. La transformación de las dinámicas delictivas exige mecanismos de protección más robustos, particularmente frente a estructuras criminales organizadas que incrementan los riesgos para víctimas y testigos; además de los peligros procesales que de alguna manera impactan los planes de protección, la adherencia a los programas y podrían propiciar la impunidad. Asimismo, se vuelve indispensable consolidar un modelo de atención verdaderamente centrado en la persona, que integre enfoques diferenciados, reduzca la revictimización y fortalezca la confianza ciudadana en el sistema de justicia, como elementos esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos en materia de seguridad y protección de derechos.

La O.A.P.V.D. enfrenta hoy un contexto más complejo que en 2009, cuando se implementó la normativa N.°8720. Actualmente, se ha dado un incremento en la violencia, mayor presencia de crimen organizado y nuevas formas de delito. Esto ha hecho más difícil la atención de víctimas y testigos, ya que los casos son cada vez más riesgosos. La mayoría de las investigaciones están relacionadas con hechos violentos, por lo que, se requieren estrategias de protección más fuertes y adaptadas a esta realidad.

La capacitación en criminalidad organizada es clave para comprender cómo operan los grupos delictivos y mejorar la protección de víctimas y testigos. Los operativos policiales suelen generar disputas por el control de territorios, lo que incrementa los delitos violentos y la cantidad de personas que requieren protección.

Esta situación exige respuestas más precisas y ajustadas al nivel de riesgo, con intervenciones profesionales rigurosas. La complejidad actual de la criminalidad hace necesario adaptar constantemente las estrategias de atención y protección.

En este contexto, la O.A.P.V.D. debe fortalecer la capacitación continua, mejorar la coordinación con los cuerpos policiales y contar con información actualizada. Además, requiere personal calificado, con pensamiento crítico y capacidad de trabajo interinstitucional para enfrentar de forma efectiva el crimen organizado.

Como resultado de lo anteriormente expuesto, los principales desafíos convergen en tres ejes principales.

- Una mayor capacidad institucional en la que sea posible reforzar los recursos, la cobertura y la modernización.
- Una calidad en la atención que sea sólida con un enfoque centrado en la víctima y evitando reproducir la revictimización, optimizando procesos de capacitación claves en el abordaje de personas usuarias víctimas de delitos complejos o tipología delictivas diversas.
- La construcción de un modelo más robusto en la atención y protección de víctimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, adaptado al nuevo contexto criminal que está caracterizando a nuestro país, como lo es la protección frente al crimen organizado.

Con estos nuevos escenarios, se hace prioritario efectuar una evaluación y actualización de la Ley N.°8720, luego que, el contexto delictivo ha cambiado radicalmente y por las nuevas tipologías criminales no estaban previstas en su diseño original. En este sentido, existe un desafío estructural que va dirigido a reformar o actualizar la ley para responder a la realidad actual; así como incorporar estándares internacionales recientes en atención y protección a víctimas.

Capítulo IX.

PROYECCIONES FUTURAS

En el marco de la mejora continua y la adaptación a los desafíos actuales que enfrenta la administración de justicia penal en nuestro país, la O.A.P.V.D., orienta su gestión hacia el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la modernización de sus modelos de intervención. En este contexto, la definición de metas para el 2026, la implementación de nuevas estrategias y el desarrollo de proyectos en curso, responden a la necesidad de brindar una atención más eficiente, especializada y enfocada a resultados, que garantice una protección integral a las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes. Estas acciones se sustentan en el compromiso de responder de manera oportuna a escenarios cada vez más complejos, incluyendo aquellos vinculados a la criminalidad organizada y casos de alto impacto social.

En línea con lo anterior, se continuará trabajando y dirigiendo esfuerzos para el cumplimiento de las siguientes metas a nivel general que impactan los procesos, específicamente en cuanto a:

- Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos internos, el uso de tecnologías de información y la gestión basada en datos.
- Mejorar la calidad del servicio; a través de la actualización de protocolos de intervención y la estandarización de modelos de atención centrados en la persona.
- Garantizar una atención especializada y diferenciada, especialmente para poblaciones en condición de vulnerabilidad y casos de alta complejidad.
- Incrementar la eficiencia en la toma de decisiones, apoyándose en herramientas analíticas y sistemas de información integrados.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional, particularmente en casos relacionados con criminalidad organizada y alto impacto social.



Del mismo modo, se proseguirá en la búsqueda de nuevas herramientas de trabajo y estrategias que permitan modernizar la gestión institucional y maximizar el impacto de las intervenciones profesionales como la incorporación de análisis de datos que permita orientar las políticas de atención y protección, reforzamiento de los modelos de intervención; ante la presencia de nuevas tipologías delictivas, la capacitación continua del personal profesional, orientada al desarrollo de competencias en análisis de riesgo, manejo de crisis y atención en contextos de delincuencia organizada; así como la actualización del marco normativo interno, alineando este con buenas prácticas internacionales y con las necesidades actuales en materia de protección a víctimas.

En lo que respecta a los proyectos en curso cuyas labores continuarán en el 2026, se detallan aquellos a los cuales, se les brindará prioridad en su ejecución.

- Análisis Integral de Datos sobre Víctimas y Grupos Criminales para la toma de decisiones en estrategias de Protección a Víctimas.
- Fortalecimiento del acceso a la justicia a las personas usuarias.
- Eficiencia en la ejecución de compras y trámites administrativos de la Oficina derivados de la Ley N. °9986.
- Optimización de las gestiones en los procesos administrativos de este despacho.
- Reformulación y fortalecimiento de los modelos de abordaje para la intervención, atención y protección de las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal
- Protocolo para la selección y clasificación de sitios de hospedaje temporal utilizados por esta dependencia. (SSHT).
- Reglamento Ejecutivo de la Ley N.°8720.
- Reforma a la Ley N.°8720.
- Optimización de la intervención psicológica.

La continuidad de estos proyectos resulta fundamental para consolidar avances estratégicos orientados a mejorar la calidad de la atención, el acceso a la justicia de las víctimas y la eficiencia institucional de esta dependencia. La naturaleza transversal de estas iniciativas que se abordan desde el análisis de datos para la toma de decisiones, la optimización de procesos administrativos, la actualización normativa y el fortalecimiento de los modelos de intervención, requiere un desarrollo sostenido en el tiempo para garantizar resultados efectivos y medibles. Por ello, asegurar su continuidad en el 2026, permite dar seguimiento a metas ya trazadas, profundizar mejoras operativas y consolidar un enfoque integral centrado en la protección de derechos de las personas usuarias.